


**Contestación a la demanda por Skandia. Dentro del proceso con radicado: 76001310501120190035600.**

Paula Huertas Borda &lt;phuertas@godoycordoba.com&gt;

Mar 19/09/2023 8:08 AM

Para: Juzgado 11 Laboral - Valle del Cauca - Cali &lt;j11lcali@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

CC: Luis Carlos Pereira Jimenez &lt;notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co&gt;; Laura Katherine Miranda Contreras &lt;notificacionesjudiciales@porvenir.com.co&gt;; Buzon Procesos Judiciales &lt;procesosjudiciales@colfondos.com.co&gt;; Ana C Reyes &lt;acreyes1212@outlook.com&gt;

 1 archivos adjuntos (21 MB)

CD Y ANEXOS.pdf;

Señores

**JUZGADO ONCE (11º) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI.**

E. S. D.

**REFERENCIA.** Proceso Ordinario Laboral de **SEBASTIANA MONTES CASTRO** contra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y OTROS.**

**RADICACIÓN.** 76001310501120190035600.

**ASUNTO.** Contestación de la demanda por **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**

**PAULA HUERTAS BORDA**, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de abogada inscrito en el Certificado de Cámara de Comercio de **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.**, quien funge como apoderado general de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, parte demandada dentro del proceso de la referencia, me permito radicar lo que se comparte.

**NOTIFICACIONES.**

Las recibiré en la Secretaría del Juzgado, o en mi oficina ubicada en la Calle 84 A No. 10 -33 Piso 11 de la ciudad de Bogotá, y en el correo electrónico [notificaciones@godoycordoba.com](mailto:notificaciones@godoycordoba.com) y [phuertas@godoycordoba.com](mailto:phuertas@godoycordoba.com) la última inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

**TRASLADO DEL ESCRITO A LAS DEMÁS PARTES INTERVINIENTES DEL PROCESO.**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, y en el numeral 14 del art. 78 del Código General del Proceso, se remite el presente memorial con copia a las siguientes direcciones electrónicas de notificaciones:

- A COLPENSIONES ([notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co))
- A PORVENIR ([notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co))
- A COLFONDOS ([procesosjudiciales@colfondos.com.co](mailto:procesosjudiciales@colfondos.com.co))
- A LA PARTE DEMANDANTE ([acreyes1212@outlook.com](mailto:acreyes1212@outlook.com))

Cordialmente,



**Paula Huertas Borda**  
C.C. 1.020.833.703 de Bogotá  
T.P. 369.744 del C.S. de la J.  
[phuertas@godoycordoba.com](mailto:phuertas@godoycordoba.com)  
Bogotá · Av. Calle 84 A No. 10 – 33, piso 11  
PBX: (57-1) 317 4628  
Celular: (315)4045067  
[www.godoycordoba.com](http://www.godoycordoba.com)  
Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín

Señores

**JUZGADO ONCE (11º) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI.**

E. S. D.

**REFERENCIA.** Proceso Ordinario Laboral de **SEBASTIANA MONTES CASTRO** contra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y OTROS.**

**RADICACIÓN.** 760013105011**20190035600.**

**ASUNTO.** Contestación de la demanda por **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**

**PAULA HUERTAS BORDA**, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de abogada inscrito en el Certificado de Cámara de Comercio de **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.**, quien funge como apoderado general de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, conforme consta en la Escritura Pública No. 721 del 23 de julio de 2020, por medio del presente solicito me sea reconocida personería adjetiva para actuar en el proceso, acto seguido, doy contestación a la demanda que dio origen al proceso de la referencia, en los siguientes términos:

### **I. FRENTE A LOS HECHOS**

<b>Al 1.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el numeral hace referencia a un hecho personalísimo de la señora demandante, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 2.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 3.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 4.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 5.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 6.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a terceros ajenos a mi representada, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 7.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.



<b>Al 8.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 9.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 10.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 11.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 12.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto se trata de una proyección pensional que no fue realizada por mi representada.
<b>Al 13.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
<b>Al 14.</b>	<b>No me consta.</b> Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la AFP Colfondos, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.

## **II. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES**

**ME OPONGO A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES** formuladas en la demanda que pretendan hacer recaer en mi representada cualquier tipo de consecuencia jurídica y/o económica en virtud del presente proceso y solicito al Despacho absuelva de todas y cada una de ellas a **SKANDIA**, por las razones que se expondrán en las excepciones de la defensa, así como frente a cada hecho y pretensión particular.

### **1. FRENTE A LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS:**

Me opongo a todas y cada una de las peticiones formuladas en la demanda que pretenda hacer recaer en mi representada cualquier tipo de consecuencia jurídica y/o económica en virtud del presente proceso y solicito al Despacho absuelva de todas y cada una de ellas a **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A**, por las razones que se expondrán en las excepciones de la defensa, así como frente a cada hecho y pretensión particular.

<b>A la 1.</b>	<b>Me opongo a esta pretensión.</b> Si bien no se trata de una pretensión dirigida en contra de mi representada. Debe tenerse en cuenta que la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipuladas en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir los diferentes formularios de afiliación.
----------------	--



Se llama la atención del Despacho, en cuanto que la demandante, lo que está haciendo es alegar la propia culpa en su beneficio, pues es indispensable manifestar que contaba con las condiciones necesarias y suficientes para verificar, corroborar y ampliar la información otorgada por parte de los fondos a los que ha estado vinculada.

Así mismo, es indispensable señalar que no es viable que la demandante alegue hoy, muchos años con posterioridad a su traslado inicial de régimen pensional y tras realizar múltiples traslados horizontales, la voluntad de retornar al RPM, cuando teniendo la posibilidad de ejercer su derecho al retracto no lo hizo.

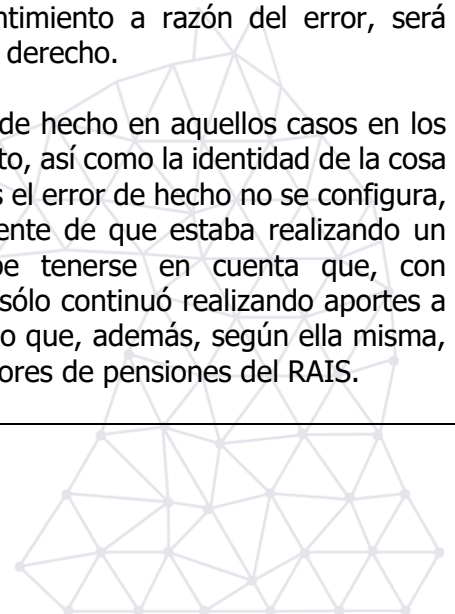
La anterior postura se encuentra válidamente respaldada por jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, en la que se señaló:

*"Pero, como si lo anterior fuera poco, ante la clara sindicación de la actora de haber sufrido engaño por parte de la A.F.P. Porvenir S.A., esto es endilgarle dolo en su actuar, frente al expreso mandato legal contenido en el artículo 1516 del código civil, no cabe duda que debió probar su afirmación, lo que no se observa que hubiese ocurrido, pues en el expediente no hay prueba en tal sentido.*

*Finalmente resulta del caso notar que, tampoco estaba llamada a prosperar la pretensión con base en la jurisprudencia traída a colación por el Juzgado, pues ésta contempla unos supuestos de hecho totalmente diferentes a los del presente caso, en cuanto el allí demandante para el momento del traslado ya había reunido los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida, lo que de suyo le representaba un perjuicio actual evidente, situación que no se percibe en el presente asunto, en el que múltiples motivos pudieron haber movido la voluntad de la accionante para preferir el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin que, para el momento en que lo hizo se perciba de manera manifiesta el acaecimiento de un perjuicio evidente (...)"*

Ahora bien, en cuanto al posible vicio del consentimiento a razón del error, será necesario señalar que existen errores de hecho y de derecho.

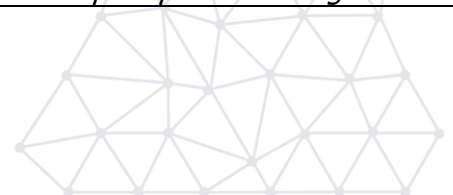
Con relación al primero, se tiene que será un error de hecho en aquellos casos en los que se yerra en cuanto a la especie del acto o contrato, así como la identidad de la cosa específica. Así las cosas, en el caso objeto de análisis el error de hecho no se configura, en la medida en la que la demandante era consciente de que estaba realizando un traslado de régimen pensional. Así mismo, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad al traslado al RAIS la demandante no sólo continuó realizando aportes a seguridad social en pensiones en dicho régimen, sino que, además, según ella misma, realizó múltiples traslados entre Fondos Administradores de pensiones del RAIS.





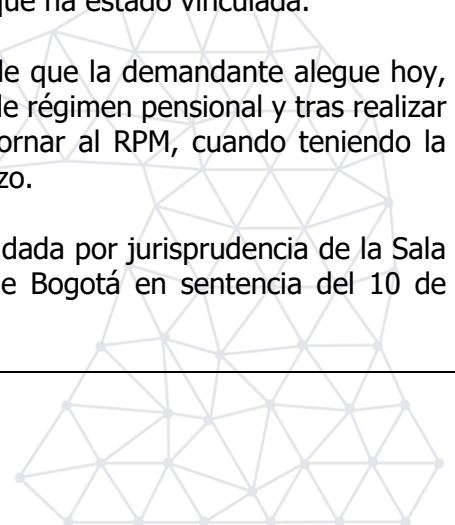


	<p>En cuanto al error de derecho, se debe indicar que, aun cuando sería la figura que mejor aplicaría al caso en concreto, pues según las alegaciones de la demandante, si bien era consciente que lo que estaba llevando a cabo era el traslado de régimen, desconocía las condiciones del RAIS y sus consecuencias, de manera que, en últimas, ello no implicaría otra cosa que desconocimiento de una figura legal. En este punto se debe señalar que, aun cuando pareciera que esta es la figura aplicable al caso lo cierto es que los artículos 9 y 1509 del Código Civil indican que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa y que el error de derecho no vicia el consentimiento.</p>
<b>A la 2.</b>	<p><b>Me opongo a esta pretensión.</b> Si bien no se trata de una pretensión dirigida en contra de mi representada. Debe tenerse en cuenta que la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipuladas en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir los diferentes formularios de afiliación.</p> <p>Se llama la atención del Despacho, en cuanto que la demandante, lo que está haciendo es alegar la propia culpa en su beneficio, pues es indispensable manifestar que contaba con las condiciones necesarias y suficientes para verificar, corroborar y ampliar la información otorgada por parte de los fondos a los que ha estado vinculada.</p> <p>Así mismo, es indispensable señalar que no es viable que la demandante alegue hoy, muchos años con posterioridad a su traslado inicial de régimen pensional y tras realizar múltiples traslados horizontales, la voluntad de retornar al RPM, cuando teniendo la posibilidad de ejercer su derecho al retracto no lo hizo.</p> <p>La anterior postura se encuentra válidamente respaldada por jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, en la que se señaló:</p> <p><i>"Pero, como si lo anterior fuera poco, ante la clara sindicación de la actora de haber sufrido engaño por parte de la A.F.P. Porvenir S.A., esto es endilgarle dolo en su actuar, frente al expreso mandato legal contenido en el artículo 1516 del código civil, no cabe duda que debió probar su afirmación, lo que no se observa que hubiese ocurrido, pues en el expediente no hay prueba en tal sentido.</i></p> <p><i>Finalmente resulta del caso notar que, tampoco estaba llamada a prosperar la pretensión con base en la jurisprudencia traída a colación por el Juzgado, pues ésta contempla unos supuestos de hecho totalmente diferentes a los del presente caso, en cuanto el allí demandante para el momento del traslado ya había reunido los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida, lo que de suyo le representaba un perjuicio actual evidente, situación que no se percibe en el presente asunto, en el que múltiples motivos pudieron haber movido la voluntad de la accionante para preferir el Régimen de</i></p>



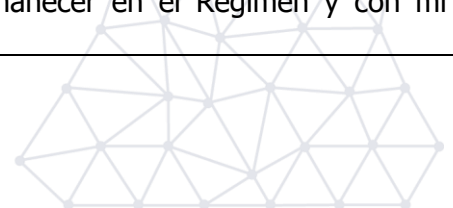


	<p><i>Ahorro Individual con Solidaridad, sin que, para el momento en que lo hizo se perciba de manera manifiesta el acaecimiento de un perjuicio evidente (...)</i>”.</p> <p>Ahora bien, en cuanto al posible vicio del consentimiento a razón del error, será necesario señalar que existen errores de hecho y de derecho.</p> <p>Con relación al primero, se tiene que será un error de hecho en aquellos casos en los que se yerra en cuanto a la especie del acto o contrato, así como la identidad de la cosa específica. Así las cosas, en el caso objeto de análisis el error de hecho no se configura, en la medida en la que la demandante era consciente de que estaba realizando un traslado de régimen pensional. Así mismo, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad al traslado al RAIS la demandante no sólo continuó realizando aportes a seguridad social en pensiones en dicho régimen, sino que, además, según ella misma, realizó múltiples traslados entre Fondos Administradores de pensiones del RAIS.</p> <p>En cuanto al error de derecho, se debe indicar que, aun cuando sería la figura que mejor aplicaría al caso en concreto, pues según las alegaciones de la demandante, si bien era consciente que lo que estaba llevando a cabo era el traslado de régimen, desconocía las condiciones del RAIS y sus consecuencias, de manera que, en últimas, ello no implicaría otra cosa que desconocimiento de una figura legal. En este punto se debe señalar que, aun cuando pareciera que esta es la figura aplicable al caso lo cierto es que los artículos 9 y 1509 del Código Civil indican que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa y que el error de derecho no vicia el consentimiento.</p>
<b>A la 3.</b>	<p><b>Me opongo a esta pretensión.</b> Si bien no se trata de una pretensión dirigida en contra de mi representada. Debe tenerse en cuenta que la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipuladas en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir los diferentes formularios de afiliación.</p> <p>Se llama la atención del Despacho, en cuanto que la demandante, lo que está haciendo es alegar la propia culpa en su beneficio, pues es indispensable manifestar que contaba con las condiciones necesarias y suficientes para verificar, corroborar y ampliar la información otorgada por parte de los fondos a los que ha estado vinculada.</p> <p>Así mismo, es indispensable señalar que no es viable que la demandante alegue hoy, muchos años con posterioridad a su traslado inicial de régimen pensional y tras realizar múltiples traslados horizontales, la voluntad de retornar al RPM, cuando teniendo la posibilidad de ejercer su derecho al retracto no lo hizo.</p> <p>La anterior postura se encuentra válidamente respaldada por jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, en la que se señaló:</p>





	<p><i>"Pero, como si lo anterior fuera poco, ante la clara sindicación de la actora de haber sufrido engaño por parte de la A.F.P. Porvenir S.A., esto es endilgarle dolo en su actuar, frente al expreso mandato legal contenido en el artículo 1516 del código civil, no cabe duda que debió probar su afirmación, lo que no se observa que hubiese ocurrido, pues en el expediente no hay prueba en tal sentido.</i></p> <p><i>Finalmente resulta del caso notar que, tampoco estaba llamada a prosperar la pretensión con base en la jurisprudencia traída a colación por el Juzgado, pues ésta contempla unos supuestos de hecho totalmente diferentes a los del presente caso, en cuanto el allí demandante para el momento del traslado ya había reunido los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida, lo que de suyo le representaba un perjuicio actual evidente, situación que no se percibe en el presente asunto, en el que múltiples motivos pudieron haber movido la voluntad de la accionante para preferir el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin que, para el momento en que lo hizo se perciba de manera manifiesta el acaecimiento de un perjuicio evidente (...)"</i></p> <p>Ahora bien, en cuanto al posible vicio del consentimiento a razón del error, será necesario señalar que existen errores de hecho y de derecho.</p> <p>Con relación al primero, se tiene que será un error de hecho en aquellos casos en los que se yerra en cuanto a la especie del acto o contrato, así como la identidad de la cosa específica. Así las cosas, en el caso objeto de análisis el error de hecho no se configura, en la medida en la que la demandante era consciente de que estaba realizando un traslado de régimen pensional. Así mismo, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad al traslado al RAIS la demandante no sólo continuó realizando aportes a seguridad social en pensiones en dicho régimen, sino que, además, según ella misma, realizó múltiples traslados entre Fondos Administradores de pensiones del RAIS.</p> <p>En cuanto al error de derecho, se debe indicar que, aun cuando sería la figura que mejor aplicaría al caso en concreto, pues según las alegaciones de la demandante, si bien era consciente que lo que estaba llevando a cabo era el traslado de régimen, desconocía las condiciones del RAIS y sus consecuencias, de manera que, en últimas, ello no implicaría otra cosa que desconocimiento de una figura legal. En este punto se debe señalar que, aun cuando pareciera que esta es la figura aplicable al caso lo cierto es que los artículos 9 y 1509 del Código Civil indican que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa y que el error de derecho no vicia el consentimiento.</p>
<b>A la 4.</b>	<p><b>Me opongo.</b> No es dable reconocer y pagar costas y agencias en Derecho por parte de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. atendiendo a que mi representada ha cumplido con la totalidad de obligaciones establecidas en la Ley. Así mismo, debe tenerse en cuenta que la afiliación y decisión de permanecer afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no ha sido una decisión caprichosa de la entidad que represento; sino por el contrario, la decisión libre, voluntaria e informada de la Demandante al permanecer en el Régimen y con mi representada.</p>





## **I. HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA**

A continuación, se presentan los hechos, fundamentos y razones de la defensa de mi representada con base en los cuales se deberá proferir sentencia absolutoria atendiendo a que todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la demanda quedarán plenamente desvirtuados.

### **1. DE LOS RÉGIMENES PENSIONALES EN COLOMBIA Y SU DESARROLLO NORMATIVO.**

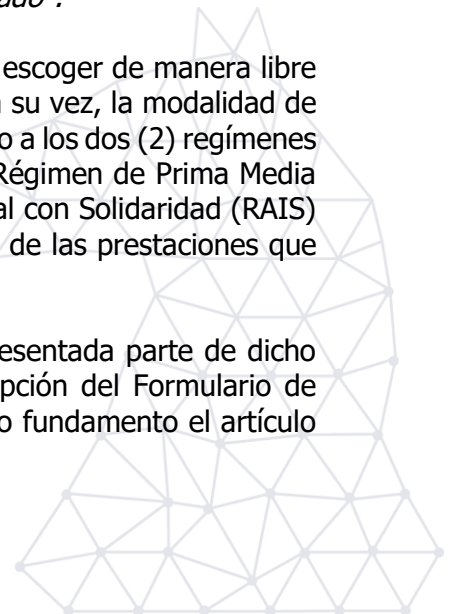
La Ley 100 de 1993 creó dos (2) regímenes pensionales excluyentes entre sí, pero que coexisten en aras de garantizar la libre escogencia de los ciudadanos de afiliarse al uno o al otro. Por un lado, se creó un régimen de prima media el cual se caracteriza por tener una contribución y prestación definida previamente en la Ley. En este régimen los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo de naturaleza pública. Por otro lado, se creó el Régimen de Ahorro Individual (en adelante, "RAIS"), el cual se caracteriza porque los aportes de los afiliados no ingresan a un fondo común como en el de Prima Media, sino que son depositados en una cuenta individual de ahorro pensional, y la obtención de la prestación y su valor, dependen del capital que el afiliado logre ahorrar en su etapa laboral productiva, sin que sea necesario analizar circunstancias de semanas cotizadas o edad acumulada como sucede en el Régimen de Prima Media.

En efecto, el legislador al expedir la Ley 100 de 1993, optó por darle al ciudadano un papel sobresaliente en la planeación de su futuro pensional, pues en el literal *b)* del artículo 13 de la citada norma determinó que todos los ciudadanos pueden escoger libremente a cuál de los regímenes desean pertenecer. La disposición en comento establece:

*"b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado".*

Ahora, en el contexto descrito anteriormente, los afiliados pueden escoger de manera libre y voluntaria a cuál de los regímenes se afilian, lo cual determina, a su vez, la modalidad de pensión. En este entendido, ningún ciudadano puede estar vinculado a los dos (2) regímenes coexistentes, por lo que se puede asumir que con la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación definida (RPMPD) o al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) el ciudadano escoge la manera en la que va a disfrutar de alguna de las prestaciones que ofrece el Sistema General de Pensiones.

La mencionada afiliación, en lo que toca al RAIS, por ser mi representada parte de dicho régimen, genera plenos efectos jurídicos desde la firma o suscripción del Formulario de Afiliación correspondiente a la parte actora. Lo anterior tiene como fundamento el artículo segundo del Decreto 1642 de 1995, que a la letra indica:





**"ARTICULO 2o. AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** *Los empleadores de que trata el artículo 1o. de este Decreto deben iniciar el proceso de afiliación de sus trabajadores, para que estos seleccionen tanto el régimen de pensiones, como la entidad administradora a la que deseen vincularse en el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a más tardar el 31 de diciembre de 1995, de conformidad con los procedimientos legales establecidos para tal efecto.*

**La selección de cualquiera de los dos regímenes previstos en la ley es libre y voluntaria por parte del trabajador, y se entenderá efectuada con el diligenciamiento del formulario de afiliación autorizado por la Superintendencia Bancaria".** *(He resaltado y subrayado).*

En lo atinente a las características que debe cumplir el Formulario de Afiliación en cualquiera de los Regímenes pensionales, el Decreto 1833 de 2016, en su artículo 2.2.2.1.8 dispone:

**"ARTÍCULO 2.2.2.1.8. Diligenciamiento de la selección y vinculación.** *La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.*

**La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en el sistema general de pensiones es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar.**

*Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora.*

*Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener por lo menos los siguientes datos:*

- 1. Lugar y fecha.*
- 2. Nombre o razón social y NIT del empleador.*
- 3. Nombre y apellidos del afiliado.*
- 4. Número de cédula o NIT del afiliado.*
- 5. Entidad administradora del régimen de pensiones a la cual desea afiliarse, la cual podrá estar preimpresa.*







6. Datos del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o beneficiarios del afiliado.

*El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el afiliado.*

*No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario respectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá notificar al afiliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.*

**Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda preimpresa en este sentido".** (He resaltado y subrayado).

También debe tenerse en cuenta que además de la libertad que tienen los ciudadanos para escoger el Régimen que administrará sus recursos pensionales, el artículo 112 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 5 del Decreto 692 de 1994; determinó la imposibilidad para las Administradoras de Fondos de Pensiones de rechazar cualquier solicitud de afiliación que reúna los requisitos expuestos anteriormente. El artículo 5 de ese ordenamiento preceptúa:

**"ARTICULO 5o. REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.**

*En el régimen de ahorro individual con solidaridad, los afiliados tienen una cuenta individualizada, en la cual se abona el valor de sus cotizaciones y las de sus empleados, las cotizaciones voluntarias, los bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ellos, más todos los rendimientos financieros que genere la cuanta individual. (...).*

**Las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo".** (He subrayado y Resaltado).

Aunado a lo regulado por el Decreto 1642 de 1995 y habida cuenta que al ciudadano se le dio un papel determinante en la planeación de su futuro pensional, la Ley 797 de 2003 determinó que, una vez efectuada la selección de régimen inicial, los ciudadanos podrán trasladarse de régimen pensional una vez cada cinco (5) años. Así mismo, impuso la prohibición de trasladarse de régimen pensional cuando faltaren menos de diez (10) años para acceder a la prestación. La norma traída a colación anteriormente expone:

**"ARTÍCULO 2o.** *Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:*

*Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.*





(...)

*e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)". (He resaltado y subrayado).*

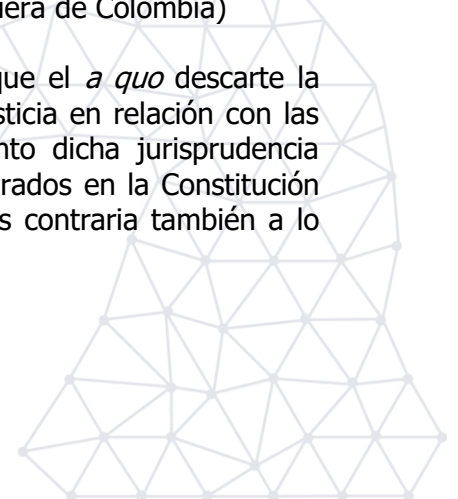
Entonces, como conclusión podemos afirmar que la afiliación de la demandante con mi representada mediante el Formulario de afiliación goza de plena validez ante la ley, por haberse cumplido con los requisitos que las distintas regulaciones e imponen a ese respecto.

Debe tenerse en cuenta, que en el caso que nos concierne la demandante realizó su traslado de régimen pensional con Colfondos, es decir, que la aquí demandante venía de estar afiliada con una AFP que pertenece, al igual que **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de lo cual se puede inferir que se encontraba a gusto de permanecer en el RAIS, y que dicha afiliación estaba precedida de conocimientos relativos al régimen en donde se estaba afiliando; y no, como se afirma en la Demanda, a una decisión caprichosa de mi representada, sin que mediara la voluntad de la actora.

## **2. LOS LINEAMIENTOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LO QUE SE REFIERE AL DEBER DE INFORMACIÓN EN CABEZA DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, SE CONSTITUYE COMO UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.**

En aras de determinar si para el caso que nos ocupa la aplicación de la posición de la Corte Suprema de Justicia respecto del Deber de Información predicable de las Administradoras de Fondos de Pensiones se constituye como una violación del principio constitucional de confianza legítima, es necesario hacer un recuento histórico del desarrollo del mencionado deber. Para estos fines, se hará un breve resumen, el cual se segmentará de la siguiente manera: **i)** Fundación de las AFP y su Deber de Información (Decreto- Ley 663 de 1993); **ii)** El Deber de Asesoría y buen consejo (Ley 1328 de 2009 y Decreto 2241 de 2010); y **iii)** El Deber de Doble Asesoría (Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015 y la Circular Básica Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia)

El ejercicio expuesto anteriormente tiene como única finalidad que el *a quo* descarte la utilización de la posición mantenida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las Nulidades/Ineficacia de Traslado de Régimen Pensional, en tanto dicha jurisprudencia irrumpe con el principio de confianza legítima y buena fe consagrados en la Constitución Política de 1991 en su artículo 83 y, por tanto, dicha posición es contraria también a lo previsto en el artículo 4 de ese ordenamiento jurídico.





Expuesto lo que antecede, en **primer lugar**, se abordará el estudio del deber de información al momento del nacimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el cual se encontraba regulado en el Decreto-Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). De este modo, el artículo 97 del mencionado Decreto- Ley 663 determinó que las Administradoras de Fondos de Pensiones debían suministrar información necesaria para que los futuros afiliados tomaran la decisión de afiliarse al respectivo fondo de manera libre y voluntaria. El artículo en comento, en su numeral primero preveía lo siguiente::

***"1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado".***

Así las cosas, de la norma transcrita podemos concluir que para el momento en el que se expide la Ley 100 de 1993, a las Administradoras de Fondos de Pensiones se les impuso un deber simple de información, es decir, que sus promotores suministraran información suficiente a los posibles afiliados en todo lo relacionado con el producto o servicio que éstos pretendían contratar, **sin que se les impusiera la carga u obligación a los Fondos de dejar evidencia física o material de la información brindada.**

**En segundo lugar**, con la entrada en vigencia de la Ley 1328 de 2009 -reglamentada por el Decreto 2241 de 2010- le fue impuesto a las Administradoras de Fondos de Pensiones, además del deber de información simple consagrado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-, el *Deber de Asesoría y Buen Consejo*, el cual debía estar compuesto por un análisis previo de las condiciones económicas, laborales y personales del posible afiliado, además de complementarse con una explicación de los pormenores de los regímenes existentes (RAIS y RPMPD). **Debe aclararse una vez más que la norma no le impone la obligación o carga a las Administradoras de Fondos de Pensiones de conservar evidencia física o material de las asesorías brindadas a sus posibles afiliados.**

Por último, la **tercera etapa** del desarrollo normativo que ha sufrido el Deber de Información/ Asesoría impuesto a las Administradoras de Fondos Privados, previo a la afiliación de cualquier ciudadano, se encuentra consagrada en la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. En las normas referidas se le impone a las Administradoras de Fondos de Pensiones, además del análisis previo de las calidades y cualidades económicas, laborales y personales del posible afiliado y la ilustración de los pormenores de las características de uno u otro régimen; la obligación de generar una asesoría por parte de los representantes del Régimen de Prima Media como de los representantes del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad.

En síntesis, en la tercera etapa del desarrollo del Deber de Información/Asesoría nos encontramos con que el Legislador, buscando crear seguridad jurídica para las personas respecto de su situación pensional (más aún cuando se trata del traslado de Régimen

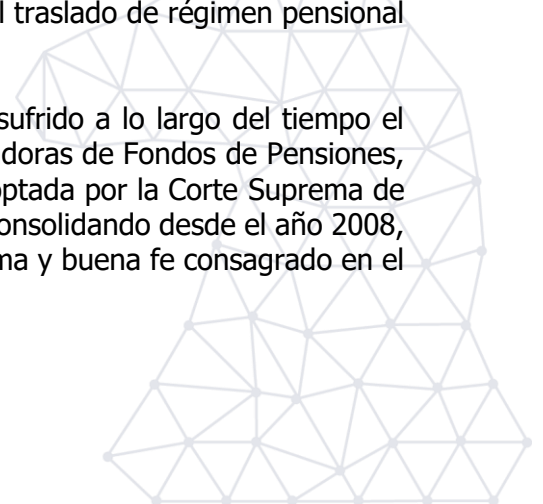


Pensional)), le impuso a las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES el deber de generar una asesoría en la que representantes de los dos (2) regímenes pensionales le muestren al afiliado de manera clara, suficiente y completa, las características, ventajas y desventajas de dichos regímenes, por supuesto atendiendo al perfil específico del interesado. Además de lo anterior, la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 **impusieron -por primera vez- el deber que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones de conservar los documentos, audios o cualquier medio en el que conste la asesoría brindada a los afiliados.**

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008 ha venido consolidando y aplicando indistintamente una línea jurisprudencial en la que se analiza lo relacionado con la nulidad de los traslados de régimen pensional, en la que ha señalado que las Administradoras de Fondos de Pensiones, por tener un deber especial de responsabilidad profesional por la posición que ostentan en el mercado, deben prestar sus servicios de forma eficiente, eficaz y oportuna, y en consecuencia cumplir con las obligaciones a su cargo; lo cual implica, en criterio de esa Corporación Judicial, que al momento de realizar una afiliación (sea traslado de régimen o traslado horizontal), la AFP debe informarle al afiliado los beneficios y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, el posible monto de la pensión, la diferencia del pago de los aportes, la conveniencia o no de la eventual determinación y la declaración de aceptación de las condiciones a las que se va a someter.

Es decir, vía jurisprudencia, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha fallado en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones, argumentando que desde su nacimiento esas entidades han ostentado un Deber de Información/Asesoría de acuerdo con los criterios esgrimidos tanto en la Ley 1328 de 2009 como en la Ley 1748 de 2014; omitiendo por completo el estudio del caso concreto de conformidad con las normas que rodeaban la materia para el momento en el que se efectuó el traslado de régimen pensional correspondiente. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia descarta el análisis del desarrollo histórico de los deberes de información/asesoría que han tenido a su cargo las Administradoras de Fondos de Pensiones, asumiendo que éste se encontraba siempre vigente en los términos de la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia; cuando lo cierto es que, para cada caso en específico, debe hacerse un análisis no sólo de la información aportada al potencial afiliado, sino de los deberes que le imponía la norma vigente a las AFP's para el momento en el que se generó el traslado de régimen pensional analizado.

Expuesto el desarrollo normativo y jurisprudencial que ha sufrido a lo largo del tiempo el Deber de Información/Asesoría en cabeza de las Administradoras de Fondos de Pensiones, se pasará a exponer porqué la aplicación de la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia mediante la línea jurisprudencial que se ha venido consolidando desde el año 2008, irrumpe con el principio constitucional de la confianza legítima y buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política.





Pues bien, el ordenamiento jurídico colombiano, en aras de crear seguridad jurídica para sus administrados, consagró la garantía de *confianza legítima* como medio para limitar la modificación brusca e inesperada de las reglas de juego que regulan cualquier situación jurídica. Frente al principio de confianza legítima, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-131 de 2004 señaló:

*"El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y **consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica.** No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, **sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo,** bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, **regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas.** De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático". (He subrayado y resaltado).*

La Corte Constitucional en la misma sentencia, sostuvo:

*"**En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar.** Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; **y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario.** Se trata, por tanto, que **el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente.** De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación". (He resaltado y subrayado).*

De este modo, el principio de confianza legítima se aplica cuando cualquiera de los órganos del poder público genera una modificación o alteración intempestiva, abrupta e



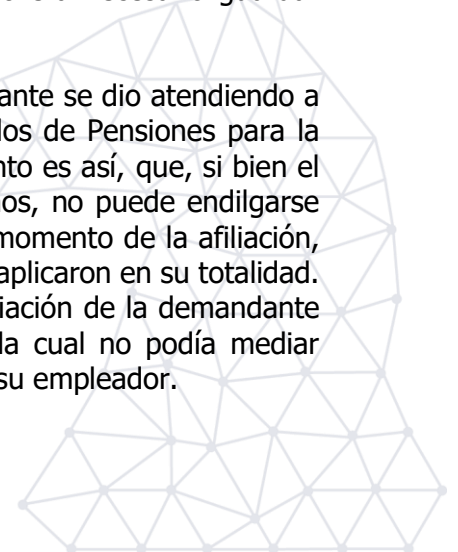
inesperada de las condiciones en las que se venía desarrollando cualquier acto jurídico. Aplicando lo anterior a la situación que nos ocupa, podemos afirmar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver con la Nulidad de Traslados de Regímenes Pensionales, ha incurrido en una violación indiscutible al principio constitucional de la confianza legítima, sobre todo en relación con el Deber de Información/Asesoría impuesto a las Administradoras de Fondos de Pensiones; pues en vez de verificar para cada caso en específico el momento en el que se generó el traslado de régimen pensional, se atiene únicamente a verificar si la información brindada al posible afiliado cumplió con los requisitos establecidos en normas cuya expedición es muy posterior a la consumación del acto de traslado de régimen. Frente a esto, la Corte Constitucional en la sentencia citada, concluyó:

**"La Corte al estimar que la interpretación judicial debe estar acompañada de una necesaria certidumbre y que el fallador debe abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretación que de las normas jurídicas venía realizando, y por ende, el ciudadano puede invocar a su favor, en estos casos, el respeto por el principio de la confianza legítima".** (He resaltado y subrayado).

Conforme lo anterior, además de la violación del principio constitucional de la Confianza Legítima, es claro que la aplicación del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia de manera indiscriminada se constituye como una violación del derecho fundamental al Debido Proceso (Art. 29 del Estatuto Superior); pues se están aplicando a determinadas relaciones jurídicas normas que no estaban vigentes para la época en la que se ocasionó el acto jurídico que pretende hacerse ver como ineficaz.

Aterrizando lo expuesto al caso concreto, podemos afirmar que la demandante se trasladó de régimen pensional, esta situación particular debe analizarse a la luz del (artículo 97 del Decreto- Ley 663 de 1993/ la Ley 1328 de 2009/ la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia). Entonces, al haberse realizado el traslado de régimen bajo la aplicación del (artículo 97 del Decreto- Ley 663 de 1993), debe tenerse en cuenta que para ese momento bastaba únicamente con diligenciar un formulario que contuviera una leyenda pre-impresa en donde constaba la manifestación de voluntad del afiliado y no era necesario guardar constancia alguna de la información aportada.

Lo anterior para concluir que el traslado efectuado por la demandante se dio atendiendo a los criterios normativos impuestos a las Administradoras de Fondos de Pensiones para la fecha del traslado y, por tanto, goza de plena validez jurídica. Tanto es así, que, si bien el Deber de Información/Asesoría ha cambiado a lo largo de los años, no puede endilgarse engaño por parte de esas entidades, cuando lo cierto es que, al momento de la afiliación, éstas actuaron conforme a la ley prevalente para el momento y la aplicaron en su totalidad. Además, aunado a lo expuesto en el acápite que antecede, la afiliación de la demandante al RAIS se dio acorde con su manifestación de voluntad, ante la cual no podía mediar interferencia alguna ni de los Fondos Privados, como tampoco de su empleador.





**3. LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE RESPECTO DE LA FALTA DE INFORMACIÓN NO ES POR SÍ SOLO SUFICIENTE PARA LA INEFICACIA DEL ACTO DE TRASLADO DEL RÉGIMEN PENSIONAL.**

La demandante alega una falencia en la información entregada por el fondo de pensiones al cual se vinculó inicialmente y sobre el particular deberá tenerse en cuenta que, la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipulados en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir el formulario de afiliación a Skandia. Lo anterior, en la medida en la que aceptar las alegaciones presentadas por la demandante, sería equivalente a aceptar que el desconocimiento de la ley tiene capacidad suficiente para generar un vicio en el consentimiento. Así mismo, lo anterior, iría en contravía de lo estipulado en el artículo 9 del Código Civil, el cual señala que: "El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento"

**4. EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO GENERA UN VICIO EN EL CONSENTIMIENTO.**

Se debe señalar que, aunque se pretende que se declare la ineficacia sobre su afiliación al trasladarse de régimen pensional, las consecuencias de la ineficacia pretendida son las mismas de la nulidad y en ese orden de ideas, lo que podría existir en este caso es una nulidad relativa, pues no se cumplen los supuestos de hecho necesarios para argüir una nulidad absoluta, como lo sería el objeto o causa ilícita, la omisión de algún requisito o formalidad o la incapacidad absoluta.

Así las cosas, si lo que pretende la demandante es que se declare la nulidad relativa, debió por lo menos señalar cuáles de las causales se configuraron en la celebración del contrato de traslado de régimen pensional. Sin embargo, ello no ocurrió y no es posible determinarlo con el expediente.

Las causales de nulidad relativa lo serían, de acuerdo con el artículo 1741 del Código Civil: i) la incapacidad relativa; ii) los vicios del consentimiento y; iii) la lesión enorme.

En atención a lo anterior, se debe precisar que en el caso que se analiza ni la incapacidad relativa ni la lesión enorme son las causales de nulidad que se podrían llegar a presentar en el caso, pues la demandante no allega prueba alguna que respalde una supuesta incapacidad relativa en su cabeza. En relación con la lesión enorme, se debe precisar que la misma es una figura que sólo es aplicable para aquellos casos en los que en atención a un negocio jurídico comprador o vendedor pueden solicitar que se rescinda un contrato de compraventa, lo cual, de manera evidente no es el supuesto que se analiza en este caso.





De esta manera, la única posible causal de nulidad que resultaría alegable por parte de la demandante sería la existencia de un vicio del consentimiento. Véase que a voces del artículo 1508 del Código Civil el vicio del consentimiento sólo puede ser causado error fuerza y dolo.

En relación con el dolo se debe precisar que el caso objeto del presente análisis no se configura, toda vez que en atención a lo señalado en artículo 1515 y 1516 ibídem el dolo no se presume, salvo en aquellos casos en los que la ley así lo establece, siendo obligación de quien lo alegue probarlo de manera suficiente. Sumado a lo anterior, no se puede perder de vista que el dolo que genera la nulidad relativa debe ser de tal suficiencia que sin él la demandante no hubiese contratado.

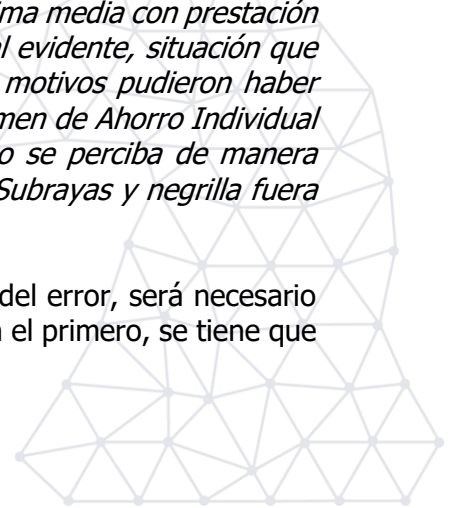
Así pues, se tiene que en este caso en particular el dolo no se configura, no sólo porque la demandante no lo prueba siquiera de manera sumaria, sino que, teniendo en cuenta las condiciones personales de la demandante, se tiene que si ella hubiese sido una persona diligente podría haber verificado las condiciones, características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, de manera que aun cuando existiese el dolo, cosa que no se prueba, no sería de tal magnitud que la demandante, actuando como un buen padre de familia, se hubiese abstenido de realizar el traslado al régimen pensional si considerara que las condiciones y características del RAIS fuesen contra sus intereses.

La anterior postura se encuentra válidamente respaldada por jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, en la que se señaló:

*"Pero, como si lo anterior fuera poco, ante la clara sindicación de la demandante de haber sufrido engaño por parte de la AFP PORVENIR, esto es endilgarle dolo en su actuar, frente al expreso mandato legal contenido en el artículo 1516 del Código Civil, no cabe duda que **debió probar su afirmación**, lo que no se observa que hubiese ocurrido, pues en el expediente o hay prueba en tal sentido.*

*Finalmente, resulta del caso notar que, tampoco estaba llamada a prosperar la pretensión con base en la jurisprudencia traída a colación por el Juzgado, pues esta **contempla unos supuestos de hecho totalmente diferentes a los del presente caso** en cuanto el allí demandante para el momento del traslado ya había reunido los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida, lo que de suyo le representaba un perjuicio actual evidente, situación que no se percibe en el presente asunto, en el que múltiples motivos pudieron haber movido la voluntad de la demandante para preferir el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin que, para el momento en que lo hizo se perciba de manera manifiesta el acaecimiento de un perjuicio evidente (...)"*.(Subrayas y negrilla fuera del texto original).

Ahora bien, en cuanto al posible vicio del consentimiento a razón del error, será necesario señalar que existen errores de hecho y de derecho. En relación con el primero, se tiene que





será un error de hecho en aquellos casos en los que se yerra en cuanto a la especie del acto o contrato, así como a la identidad de la cosa específica. Así las cosas, en el caso objeto de análisis el error de hecho no se configura, en la medida en la que la demandante con posterioridad al traslado al RAIS continuó realizando aportes a seguridad social en pensiones en dicho régimen.

En cuanto al error de derecho, se debe indicar que, aun cuando sería la figura que mejor aplicaría al caso en concreto, pues según las alegaciones de la demandante, si bien era consciente que lo que estaba llevando a cabo era el traslado de régimen, desconocía las condiciones del RAIS y sus consecuencias, de manera que, en últimas, ello no implicaría otra cosa más que desconocimiento de una figura legal. Es más, aceptar la existencia de un error de derecho en los términos señalados por la parte demandante implicaría reconocer que el ordenamiento jurídico, en contravía de lo establecido en el artículo 9 del Código Civil, tiene como excusa el desconocimiento del derecho, lo cual no es viable más aun cuando el artículo 1509 del Código Civil indica que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, pues precisamente equivaldría a que el traslado de la demandante al RAIS se generó como consecuencia del desconocimiento de la ley por parte de la demandante.

Así las cosas, señala el artículo 9 del Código Civil:

*"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa".*

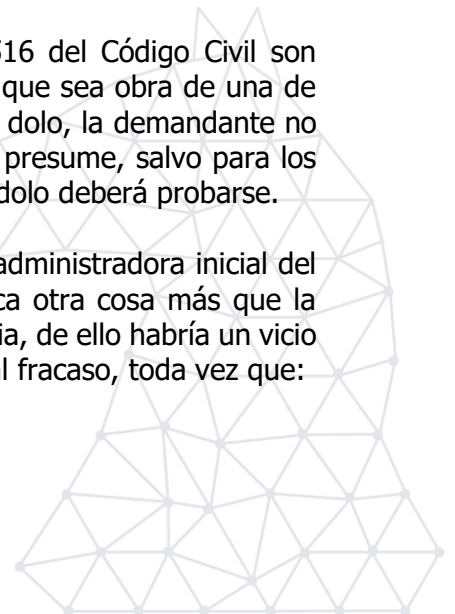
De igual mente, prescribe el artículo 1509 del Código Civil.

*"El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento"*

En este punto resulta indispensable señalar que salvo el error de derecho que se analizó en precedencia, la única causal adicional que podría esgrimir la demandante sería el de dolo por parte de la AFP que realizó el traslado de régimen pensional, sin embargo, no puede pasarse por alto que la demandante en el escrito de la demanda no allega prueba siquiera sumaria dirigida a acreditar que la AFP que llevó a cabo el traslado hubiese actuado de manera dolosa.

Sobre el particular, se debe indicar que los artículos 1515 y 1516 del Código Civil son enfáticos en señalar que el dolo no vicia el consentimiento, salvo que sea obra de una de las partes y tuviese una incidencia tal que, de no haber existido el dolo, la demandante no habría suscrito el contrato. Asimismo, se indica que el dolo no se presume, salvo para los casos en los que la Ley así lo señale, en todos los demás casos el dolo deberá probarse.

Así las cosas, si lo que la demandante pretende alegar es que la administradora inicial del RAIS, a la cual estuvo vinculada, la indujo a error, ello no implica otra cosa más que la administradora habría actuado de manera dolosa y, en consecuencia, de ello habría un vicio en el consentimiento. Sin embargo, dicha alegación está llamada al fracaso, toda vez que:





- i) Las características, condiciones, ventajas y desventajas con las que cuenta cada uno de los regímenes, se encuentran establecidas en la Ley 100 de 1993 y las demás disposiciones complementarias, de manera que el dolo, en caso de existir, no es de naturaleza tal que, de haberse presentado, la demandante no hubiese suscrito el contrato, pues la parte actora contaba con las herramientas suficientes y necesarias para poder verificar si la información dada por parte de la AFP era suficiente o no;
- ii) La demandante no prueba de manera siquiera sumaria la existencia del dolo, de manera que el mismo no podrá ser declarada si la demandante no cumple con la carga de la prueba que la ley le impone en su cabeza. Finalmente, la fuerza como una de las causales de vicio del consentimiento, es una figura que no se aplica al caso que se analiza, en cuanto que la fuerza supone que se genere un temor en la persona o una impresión fuerte, lo cual la demandante en este caso no alega.

##### **5. LA DEMANDANTE CONTÓ CON VARIAS OPORTUNIDADES PARA TRASLADARSE NUEVAMENTE DE RÉGIMEN Y NO LO HIZO.**

Debe tenerse en cuenta que, la demandante durante todos estos años de afiliación al RAIS contó con varias oportunidades para revertir su decisión de cambiar de régimen pensional e incluso lo hizo, decidiendo y libre y voluntariamente retornar al RAIS, de lo cual solamente es posible concluir que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculado a este régimen pensional, pues de lo contrario, hubiese optado por trasladarse al RPM.

Importa anotar que de esta posibilidad de traslado se dio conocimiento a la opinión pública por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) a través de la Circular Externa No 001 de 2004. Igualmente, Asofondos, entidad gremial que agrupa a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, hizo pública esa posibilidad en un comunicado que fue publicado en un diario de amplia circulación nacional.

Aparte de ello, el artículo 3 del Decreto 1161 de 1994 estableció un derecho de retracto para el traslado de régimen pensional.

Como se observa, la demandante contó con varias posibilidades legales para regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de las cuales es forzoso entender que tenía conocimiento por estar establecidas en disposiciones legales de público conocimiento y por haber sido ejercidas por ella misma. Alegar lo contrario equivaldría a aceptar que en este caso se justifica y excusa la ignorancia de la ley.

Es bien sabido que en cabeza de todos los ciudadanos se encuentra el deber de conocer las leyes, pues no es excusa su desconocimiento, tal y como se estableció en la sentencia C 651 de 1997, cuando la Corte Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 9 del Código Civil que dispone:



*"Art.9: La ignorancia de la ley no sirve de excusa". Se indicó en la mencionada sentencia: (...) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico".*

En ese sentido, debe apreciarse por parte del Despacho que la demandante, quien es la mayor interesada en su situación pensional, actuó de forma poco diligente frente a los traslados realizados y solamente después de muchos años mostró un inusitado interés por su situación pensional.

## **6. EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES HACE VÁLIDO EL ACTO DE AFILIACIÓN DE LA DEMANDANTE AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.**

Continuando con los motivos que fundamentan la imposibilidad de acceder a las pretensiones de la Demanda formulada por la actora, es necesario analizar si el acto jurídico por medio del cual se configuró el traslado de régimen acredita los requisitos que la ley impone o si, por el contrario, es dable declarar su nulidad por haberse omitido uno de ellos. En este sentido, para efectos de lo descrito es necesario determinar si la Demandante cumplía con las calidades necesarias para obligarse.

Así las cosas, debe ponerse de presente que los requisitos que un sujeto de derechos debe acreditar para ser capaz de obligarse y, por tanto, para ejecutar válidamente un acto o relación jurídica, se encuentran contenidos en el artículo 1502 del Código Civil colombiano, el cual preceptúa en su tenor literal lo siguiente:

**"ARTICULO 1502. <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>.** *Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:*

*1o.) que sea legalmente capaz.*

*2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.*

*3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.*

*4o.) que tenga una causa lícita.*

**La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra".** *(He resaltado y subrayado).*

Además de lo expuesto, conforme se explicó en el acápite que antecede, en el campo de la Seguridad Social se ha implementado para el caso de los traslados de régimen pensional, una condición especial previa a su materialización, según la cual las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen que ilustrar de manera suficiente y clara al posible afiliado las condiciones en las que se desenvolverá su situación pensional, es decir, que el consentimiento del afiliado se encuentre debidamente permeado por dicha información.

Ahora bien, en el escrito de la Demanda formulada por la actora se solicita al Juez que se declare la ineficacia del traslado de régimen. sin dejar claro si la ineficacia se genera por la



inexistencia del acto, la nulidad absoluta, la nulidad relativa o la inoponibilidad del mismo. Imprecisión que no es irrelevante, pues los efectos jurídicos que consagra la norma para cada una de estas figuras son distintos.

En efecto, debe tenerse claro que la **inexistencia** impide que el acto afectado produzca efectos jurídicos; por su parte, el efecto de la **nulidad absoluta consiste en** retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la celebración del acto jurídico correspondiente; la **nulidad relativa**, retrotrae los efectos a su estado inicial, sin embargo, se caracteriza por ser saneable, ya sea por el paso del tiempo o por la ratificación del afiliado y, por último, **la inoponibilidad** deja sin acción alguna a los interesados respecto del negocio o acto jurídico celebrado.

Verificado el escrito de la Demanda formulada por la actora, y haciendo un esfuerzo interpretativo sobre el mismo, dada la imprecisión de que adolece, es posible colegir que lo pretendido por la actora es la nulidad relativa del traslado, pues no se acreditan, ni siquiera teóricamente, los presupuestos para argüir una sanción de invalidez diferente., a la luz de lo contemplado por los artículos 1502 y 1741 del Código Civil. Así las cosas, si lo que pretende la Demandante es que se declare la nulidad relativa, éste debió señalar cuál de las causales que dan lugar a esa sanción se configuró en la celebración del acto con el que se consumó el traslado de régimen pensional, las cuales pueden ser: **i)** Incapacidad Relativa; **ii)** Los vicios del consentimiento; y **iii)** lesión enorme.

En lo que guarda relación con la nulidad relativa, para el caso que nos ocupa, es procedente establecer que ella no podría ser aquí argüida con base en la incapacidad relativa, o en la lesión enorme, pues para que se declare la primera no se aporta prueba alguna que acredite a la Demandante como incapaz relativo; y en lo que respecta a la lesión enorme, tampoco se reúnen los requerimientos que esa figura precisa, consistentes en la presencia de un contrato en el que se ven afectados los intereses de alguna de las partes, cuando el valor del objeto que subyace al acuerdo de voluntades difiere desproporcionadamente de su valor real.

En consecuencia, dentro del ejercicio interpretativo al que obliga el Escrito de Demanda, dada su imprecisión y falta de claridad, hay que colegir que la única casual que podría alegar la Demandante es la configuración de vicios del consentimiento, la cual –como se explicará– tampoco tiene cabida en el proceso que hoy nos convoca. De esta manera, respecto de los vicios del consentimiento el artículo 1508 del Código Civil determina:

**"ARTICULO 1508. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.** *Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo".*

En cuanto al error y siguiendo lo preceptuado en el artículo 1509 de ese mismo cuerpo normativo, es pertinente establecer que el yerro de derecho no produce vicios del consentimiento, por lo cual es irrelevante de cara al proceso *sub-examine*.



Frente al error de hecho, según los dispuesto en el artículo 1510 del Código Civil, éste sólo vicia el consentimiento cuando se presenta en relación con la especie del acto o contrato celebrado, o sobre la identidad de la cosa en específico; errores que no se verifican en el contrato celebrado por la actora y SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. , ya que la demandante SÍ pretendió afiliarse al RAIS y seguir afiliado al mismo, toda vez que se trasladó entre administradoras de ese régimen, con lo cual convalidó su decisión de seguir perteneciendo al mismo.

Por otro lado, en cuanto al dolo, el artículo 1516 del Código Civil señala que debe ser probado por quien lo alega, y dentro de la demanda tan sólo se realizan una serie de afirmaciones vagas que no encuentran respaldo probatorio, como no podría ser diferente porque éste no tuvo lugar en el caso que nos ocupa. Finalmente, la fuerza como una de las causales de vicio del consentimiento, es una figura que no se aplica al caso en concreto, en cuanto que ella lleva consigo que se genere un temor o impresión fuerte en la persona, la cual la Demandante no alega en el presente caso y tampoco se presentó.

En síntesis, si bien es cierto existe un Deber de Información/Asesoría por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, éste debe analizarse de acuerdo con:

- a. El momento histórico en el que se dio el acto que configuró el traslado de régimen pensional, atendiendo a que éste ha evolucionado a través de los años, y los deberes que tenían las AFP's **para la fecha de su traslado de régimen pensional a Colfondos**, son distintos a los que actualmente ostentan;
- b. Que por más que exista el mencionado deber, ello *per se* no exonera al potencial afiliado de concurrir lo suficientemente ilustrado a la escogencia de su régimen pensional, del cual dependerán sus expectativas económicas y de plazo para acceder a la pensión de vejez;
- c. Que si bien la norma impone ciertos deberes a las Administradoras, el hecho de no ser un profesional en la materia no sustrae al potencial afiliado de la aplicación de las prohibiciones consagradas en la ley, como tampoco anula su capacidad para celebrar actos y contratos de una importancia tan amplia como esta.

Lo anterior se encuentra respaldado por el salvamento de voto a la sentencia SL-1452-2019, cuya Magistrada Ponente es la Doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, acto procesal que establece lo siguiente:

**"(...) el acto de traslado si bien impone un deber de información suficiente por parte de las administradoras, ello per se, no exonera al afiliado del deber de concurrir suficientemente informado a la escogencia de su régimen pensional, de la cual dependerán sus expectativas económicas y de plazo para acceder a las prestación por vejez; como tampoco lo sustraen de la aplicación de la ley, para darle un tratamiento desigual, como si su capacidad para celebrar actos y contratos estuviera menguada**





**frente a la definición de un acto de mayor importancia, en la medida en que de su elección dependerán las condiciones de cubrimiento de las contingencias, amparadas por el sistema de seguridad social y en particular la de vejez". (He resaltado y subrayado).**

En conclusión, que, a la fecha de presentación de la demanda, la parte actora considere que en su momento se le debió indicar otra información adicional a la que mandaba la ley, no es razón suficiente o argumento para alegar un error de forma o una mala asesoría, y tampoco se aviene con el ordenamiento jurídico aplicable a la materia, razón por la cual el traslado examinado no adolece de ninguna invalidez y así debe ser reconocido.

**7. EL TRASLADO EFECTUADO POR LA DEMANDANTE A SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES NO LE OCASIONÓ PERJUICIO ALGUNO, PUES ÉSTA VENÍA DE ESTAR AFILIADA AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD CON UNA AFP DISTINTA A MI REPRESENTADA.**

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la afiliación de la actora al fondo de pensiones administrado por **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** se efectuó como traslado horizontal entre administradoras del mismo régimen. Lo anterior, en virtud del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, el cual expone:

*"ARTICULO. 107.-Cambio de plan de capitalización o de pensiones y de entidades administradoras. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensionado a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora".*

En conclusión, el hecho que la Demandante mantenga vigente su afiliación al RAIS, a través de las vinculaciones realizadas, que insisto se presentó como traslado entre AFP, no obedece a una conducta arbitraria o caprichosa del fondo de pensiones y menos aún de la sociedad **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, sino a la falta de manifestación de voluntad de la misma Demandante de regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al no haber solicitado el traslado de régimen pensional en los términos que la norma establece.

**8. LA AFILIACIÓN DE LA DEMANDANTE CON MI REPRESENTADA SE REALIZÓ ACORDE CON LOS PARÁMETROS EXIGIDOS Y CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE.**

La afiliación de la Demandante con mi representada se realizó acorde con los parámetros exigidos y contemplados en la normatividad (Ley 100 de 1993), especialmente con lo previsto en el Decreto-Ley 663 de 1993, el cual en su artículo 97 establecía el derecho



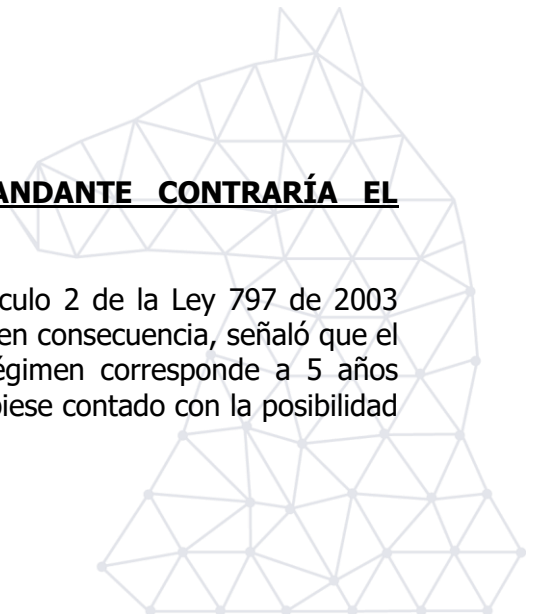
de información por parte de los consumidores financieros y, de ser el caso, con las demás disposiciones que *a posteriori* modificaron ese deber.

En las normas traídas a colación, no sólo se explican los parámetros, obligaciones e información que se deben seguir y practicar para todas las AFP del RAIS, sino que se hace referencia a tres (3) aspectos que fueron totalmente desplegados y realizados por parte de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. al momento de informar/ asesorar a la demandante, como es que:

- ✓ **Fue información cierta:** toda vez que la demandante, cuando se afilió a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., tuvo pleno conocimiento de las condiciones con las cuales pertenecía a este régimen, y la información/asesoría de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. le permitió ser consciente de las circunstancias del RAIS, lo que deja en evidencia, que SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. en este caso no se reservó o guardó para sí ningún dato relevante para la vinculación jurídica de la Demandante.
- ✓ **En cuanto a la información suficiente,** se toma como la información que logre que la afiliada tenga un conocimiento más amplio sobre las características del sistema, los productos y las condiciones para acceder a uno u otro régimen pensional. Aspecto que se hizo por parte de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y que permitió que la Demandante quedara satisfecha con dicha información/asesoría y acompañamiento a lo largo de su afiliación, pues a la fecha de contestación de la presente Demanda continua en este régimen.
- ✓ **La información sea oportuna,** lo que implica que la información deberá ser transmitida en los momentos previstos para ello. Aspecto que también se cumplió por parte de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., ya que durante el tiempo en que ha estado afiliada con mi representada, a la Demandante se le ha brindado la información que necesita saber sobre el RAIS, y sobre su situación pensional acorde al caso.

## **6. LA SOLICITUD DE INEFICACIA DE LA DEMANDANTE CONTRARÍA EL PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS.**

Se debe tener en cuenta que, si bien es cierto que el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificó el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, señaló que el plazo a partir del cual el afiliado podrá trasladarse de régimen corresponde a 5 años posteriores al traslado, no implica ello que el afiliado no hubiese contado con la posibilidad





de trasladarse en vigencia de esta disposición, pues desde la entrada en vigencia de esta norma hasta la presentación de la demanda, han transcurrido más de 20 años.

Lo anterior implica, que la parte demandante no puede pretender vía proceso ordinario la declaración de la ineficacia de la afiliación, cuando en sí misma contraría sus actuaciones y decisiones en materia pensional, **como quiera que pese a tener el tiempo suficiente para trasladarse al RPM e incluso haberlo hecho tras su traslado original, adoptó la decisión de permanecer en el rais y de hacer varios traslados horizontales dentro de este.**

En este punto se debe traer en cuenta la doctrina de los actos propios desarrollada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia SC10895 de 2015, haciendo alusión a sentencia 2006-00041-01 de 2013, señaló:

*"Inocultable es, por lo tanto, la importancia de actuar con sujeción a los postulados que se derivan del principio general de la buena fe, pues sólo así es posible 'la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo', que a voces del artículo 2º de la Constitución Política son, entre otros más, fines del Estado Social del Derecho.*

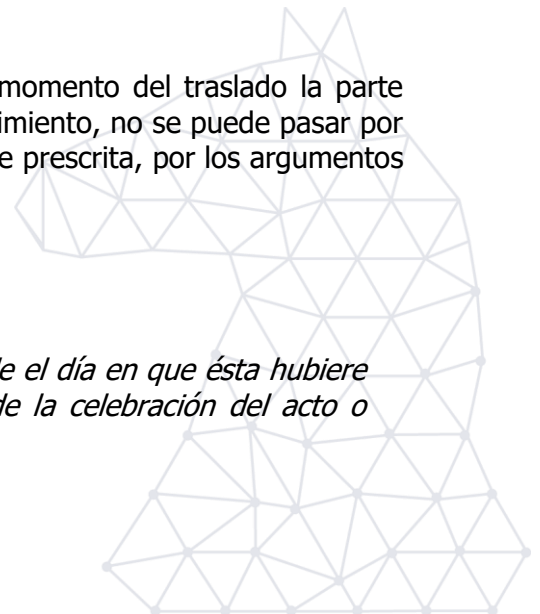
*(...) Con fundamento en el comentado principio, se ha estructurado la 'doctrina de los actos propios' -venire contra factum proprium non valet-, conforme a la cual, en líneas generales, con fundamento en la buena fe objetiva existe para las personas el deber de actuar de manera coherente, razón por la cual ellas no pueden contradecir sin justificación sus conductas anteriores relevantes y eficaces, específicamente si con tales comportamientos se generó una expectativa legítima en los otros sobre el mantenimiento o la continuidad de la situación inicial". (Subrayas y negrilla fuera del texto original).*

## **7. ACTUALMENTE LA SOLICITUD DE INEFICACIA DE LA VINCULACIÓN SE ENCUENTRA PRESCRITA.**

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que al momento del traslado la parte demandante fuese objeto de algún tipo de vicio de consentimiento, no se puede pasar por alto que la pretensión de nulidad se encontraría actualmente prescrita, por los argumentos que se proceden a exponer.

En primer lugar, el artículo 1750 del Código Civil predica:

*"El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.  
Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.*





*Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.*

*A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrienio y se contará desde la fecha del contrato.*

*Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado otro plazo”.*

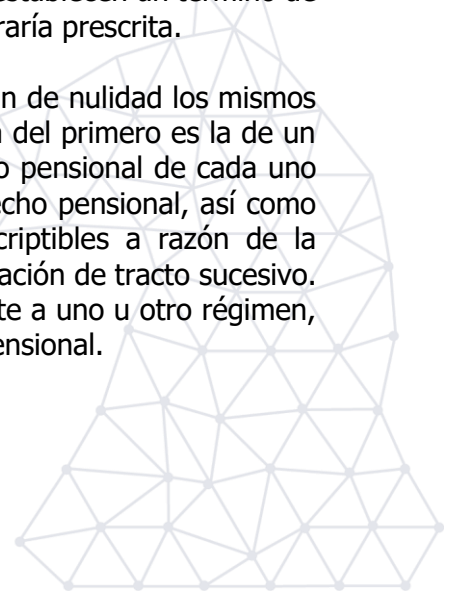
La aplicación de esta disposición a casos como el que nos convoca se encuentra respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia 22.125 de 2014 indicó:

*"La nulidad absoluta se reduce a las causales contenidas en el artículo 1741 ibídem, esto es, el objeto ilícito, la causa ilícita, la omisión de ciertos actos o actos o contratos en consideración de la naturaleza de ellos y la incapacidad absoluta, mientras que en relación con la nulidad relativa esa misma disposición dispuso en su inciso final cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato”, lo que se predica como derivados de una incapacidad relativa o incapacidades particulares como por ejemplo, las que impone la ley a ciertas personas para ejecutar algunos actos, los emanados del consentimiento, valga decir, el error, el dolo y la fuerza, la lesión enorme en ciertos casos, etc.*

*Es del caso agregar, que de haber existido un vicio que diera lugar a la única nulidad posible para el caso particular, esto es, la relativa, estaría vencido el plazo de cuatro años para pedir la rescisión o nulidad de contrato previsto en el artículo 1750 ibídem”*

Ahora bien, si el Despacho considera que dada la naturaleza de seguridad social que tiene la acción de nulidad interpuesta por la demandante, las normas que regularían la prescripción en el caso en concreto serían las contenidas en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, que establecen un término de tres años para que opere la prescripción, la acción igual se encontraría prescrita.

Aunado a lo anterior se tiene que, no puede otorgársele a la acción de nulidad los mismos efectos que se le otorgan al derecho pensional, pues la naturaleza del primero es la de un contrato civil, aun cuando tenga incidencia indirecta en el derecho pensional de cada uno de los afiliados. Asimismo, se deberá tener en cuenta que el derecho pensional, así como los aportes a seguridad social en pensiones se tornan imprescriptibles a razón de la naturaleza de la prestación, que no es otra que la de ser una obligación de tracto sucesivo. Sin embargo, no sucede lo mismo con el traslado de la demandante a uno u otro régimen, toda vez que ello no afecta el reconocimiento mismo al derecho pensional.





## **8. EN CASO DE EXISTIR NULIDAD ALGUNA, LA MISMA YA SE ENCONTRARÍA SANEADA.**

Ahora bien, se debe tener en cuenta que, aun cuando se aceptará que existió un vicio en el consentimiento, lo cierto es que este tipo de vicio sólo tiene la facultad de generar una nulidad relativa más no absoluta, de manera que la misma, en atención a lo señalado en el artículo 1743 del Código Civil, que indica:

*"La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes".*

De hecho, véase que la demandante actuó de manera contraria a lo que alega en la demanda, pues realizó el traslado inicial del RPM al RAIS, posteriormente retornó al RPM y finalmente, en conocimiento tácito de los pormenores de ambos regímenes, decide retornar al RAIS. Lo anterior, no implica cosa distinta a que, si en gracia de discusión se aceptara que existió una nulidad relativa por un presunto vicio del consentimiento, la misma actualmente se encontraría saneada, por la ratificación de la demandante en su interés de permanecer vinculada al RAIS.

## **9. IMPROCEDENCIA DE LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.**

En primer término, se debe advertir que, respecto a la aplicación de la jurisprudencia como fuente auxiliar de derecho, el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia prescribe:

*"La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial."*

Por su parte, en materia legal, la Ley 153 de 1887, en su artículo 4, determina que la jurisprudencia servirá para ilustrar la Constitución en casos dudosos. Mientras que, el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, determina que:

*"Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores." (Subrayas y negrilla fuera del texto original).*

En consecuencia, tenemos que la jurisprudencia podrá ser aplicada por los jueces como criterio auxiliar de derecho, para destrabar la Litis **en casos análogos.**

En este sentido, tenemos que en el presente caso no sería correcta la aplicación de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia sobre inversión de la carga





de la prueba sobre nulidades o ineficacias de traslado de régimen pensional y afiliación al RAIS, pues la jurisprudencia del alto tribunal ha sido clara en aplicar dicha inversión en casos en que el afiliado sufrió un “perjuicio actual evidente” al efectuar el traslado de regir, por estar renunciando a expectativas legítimas de derecho y derechos consolidados, situaciones que evidentemente no ocurrieron en el caso de la demandante al efectuar su traslado de régimen.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en el presente caso no es procedente la aplicación del precedente jurisprudencial que impone la inversión de la carga de la prueba en casos de nulidad de afiliación al RAIS, pues como se indicó, la demandante al momento del traslado inicial al RAIS, tenía tan solo meras expectativas de derecho pensionales a partir de las cotizaciones que hasta el momento había realizado al ISS, sin que existiera a su favor un derecho pensional consolidada, es más, la demandante ni tan si quiera tenía expectativas legítimas de derecho que la hubieren hecho acreedora del régimen de transición pensional al momento de su traslado. Por lo tanto, **no existe fundamento jurídico para que el juzgador imponga la inversión en la carga de la prueba respecto del vicio del consentimiento aducido en la demanda.**

#### **10. IMPOSIBILIDAD DE REINTEGRAR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUROS PREVISIONAL.**

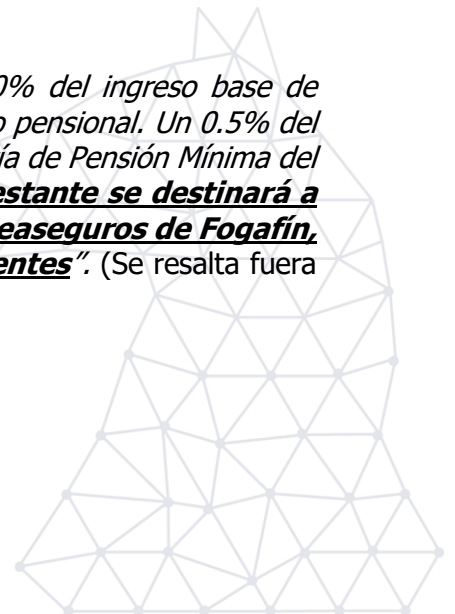
Tal como se ha expuesto a largo del presente escrito, es claro que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se crea el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y con ello un conjunto de obligaciones para las administradoras de pensiones en favor de cada uno de los afiliados a este subsistema.

Puntualmente, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 señala:

*B. “En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. **El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.***

*En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el **3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes**”. (Se resalta fuera del texto).*

Adicionalmente, el Decreto 692 de 1994 en su artículo 36 señala:





*"ARTICULO 36. DISTRIBUCION DE LAS COTIZACIONES. La tasa de cotización para pensiones será a partir del 1 de enero de 1996 del 13.5% la cual se aplicará al ingreso base de cotización total será del 11.5% y a partir del 1 de enero de 1995 será del 12.5%. De la tasa de cotización total prevista tanto las administradoras del régimen de ahorro como del régimen de prima media deberán capitalizar en las cuentas de ahorro del afiliado en las reservas del fondo común según el caso los siguientes puntos porcentuales; el 8% en 1994 el 95 % en 1995 y el 10% a partir de 1996. El ISS y las cajas, fondos o entidades de previsión mientras no se ordene su liquidación deberán llevar cuentas separadas de las reservas para la pensión de vejez y de gastos de administración. En relación con los riesgos originados en las pensiones de invalides y sobrevivientes podrá contraer los seguros respectivos o asumir el riesgo directamente. En uno u otro caso deberá llevar cuentas separadas de las primas canceladas o de, las reservas que debe constituir si asume el riesgo, según las normas que establezca la superintendencia bancaria".*

De conformidad con las normas aludidas, se puede colegir que el tres por ciento (3%) de la cotización en ambos regímenes pensionales se destina a cubrir: (i) los gastos y/o comisión de administración y; (ii) el pago de la prima para los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Correlativamente con la contraprestación mencionada se crean con una serie de obligaciones que deben cumplir las administradoras de pensiones, entre las cuales se encuentran las siguientes: (i) administrar la cuenta de ahorro individual del afiliado; (ii) garantizar una rentabilidad mínima de los fondos de pensiones; (iii) consolidar la historia laboral; (iv) ejercer la acción de cobro frente a las moras y; (v) garantizar que en caso de cumplirse con requisitos de pensión de sobrevivencia e invalidez se pueda financiar dicha prestación al afiliado y sus beneficiarios, entre otras.

Bajo este escenario, es relevante mencionar que si bien es cierto las pretensiones de la demanda giran en torno a la ineficacia/nulidad de la afiliación al RAIS y que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la consecuencia de ésta, es el regreso automático de las cosas al estado inicial (SL 3464 de 2919); pues también lo es, que corresponde al Juez hacer un estudio de ponderación objetiva en cuanto a las restituciones mutuas, la confianza legítima y la buena fe que ostenta SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A..

En primer lugar, se debe advertir que, **SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** actuó de buena fe dentro de toda la relación contractual con la Demandante y administró en forma correcta la cuenta de ahorro individual del señor actor; por lo que resulta oportuno citar el siguiente aparte de la sentencia 25307 (10326) de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 5 de agosto de 2014, con ponencia del magistrado Arturo Solarte, según el cual:

*«Es patente, entonces, que el Tribunal erró en la interpretación del artículo 1746 del Código Civil y que, como consecuencia de tal yerro, no hizo actuar el artículo 964 ibídem, pues de no haber cometido tales desatinos, habría colegido que el aquí demandado, al ser poseedor de buena fe, como esa misma Corporación lo calificó en su propio fallo, apreciación fáctica que al no estar comprendida en la acusación*



*no puede ser revisada por la Corte, estaba obligado a **restituir únicamente los frutos percibidos con posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda, porque sólo a partir de este momento quedaba sometido al régimen que para (...)»** (Se resalta).*

En segundo lugar; y como su nombre lo indica, la comisión de administración está direccionada a retribuir las diferentes actividades que deben desarrollar las instituciones pensionales que conforman el Sistema General de Pensiones, entre las cuales se encuentra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**; luego dicha comisión no es del afiliado y no está destinada a la financiación de la pensión de vejez, porque tanto en el RAIS como en el RPM, la ley dispone dicho porcentaje a favor de las administradoras de pensiones, y si esto es así, ordenar que se devuelva el porcentaje de comisión de administración es generar un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES (o del destinatario de esa devolución) y un pago de lo no debido, pues esta última nunca realizó la función de administración conforme lo dispone la ley.

Finalmente, está acreditado con las pruebas documentales adjuntas a la contestación de la demanda que SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. cumplió con generar una rentabilidad acorde con las directrices legales y de la Superintendencia Financiera. **Más aún, si se tiene en cuenta que la rentabilidad generada por SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. excede la rentabilidad mínima ordenada en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993.** Por lo anterior, no resulta procedente reintegrar la comisión de administración, cuando en el ejercicio legítimo de las obligaciones legales vigentes durante la vinculación de la Demandante, Skandia Pensiones y Cesantías S.A. cumplió con cada una de ellas.

De esta forma, ordenar el reintegro de dicha comisión es una clara violación al principio constitucional de buena fe, confianza legítima y al Debido Proceso pues se ordena judicialmente devolver una suma que tiene un titular definido legalmente. SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. llevó a cabo la administración de dichos recursos, así como todas las labores exigidas por la Ley respecto de los dineros contenidos en la Cuenta de ahorro Individual de la parte Actora; razón por la cual no es viable devolver dichas sumas a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, más aún cuando dichos dineros ya generaron rendimientos, beneficiando al Afiliado directamente.

Ahora bien, en lo que respecta a la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia tampoco es procedente que Skandia Pensiones y Cesantías deba asumirlas, en tanto la causa de aseguramiento (invalidez y sobrevivencia) es permanente y la Demandante goza de cobertura durante toda la vinculación al fondo de pensiones obligatoria de Skandia Pensiones y Cesantías S.A., de ahí que parte del mencionado porcentaje, ya fue pagado a la aseguradora para cubrir los riesgos de invalidez y muerte del(a) actor(a) y, por tanto, no se encuentra en las arcas de la AFP, **afirmación que se ratifica con el concepto No. 2019152169-003-000 de fecha 15 de enero de 2020 de la Superintendencia Financiera**, que al respecto indicó:



garantía de la pensión mínima y sus respectivos rendimientos.

2. *¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y excluir las sumas que por concepto de prima de seguro previsional fueron sufragadas a favor del afiliado mientras estuvo vigente su afiliación, dado que la compañía aseguradora mantuvo la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte de su asegurado durante la vigencia del seguro, y además por cuanto operó la figura de la prima devengada?*

En igual sentido, en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la compañía aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado; sin perjuicio de la vinculación que a este tipo de procesos se haga a las aseguradoras que han sido contratadas para dichos fines, para que puedan ejercer la defensa de sus intereses.

3. *Conforme al marco normativo vigente, ¿sería válido el siguiente tratamiento legal que han de recibir los aportes recibidos, cuando por virtud de la declaratoria judicial de nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, el afiliado debe retornar al RPM?*

Concepto	Devolución
Cuenta de Ahorro Individual (Aportes y Rendimientos)	Si
FGPM (aportes y rendimientos)	Si
Prima de Seguro Previsional	No
Comisión Administración	No

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento  
es de todos

Mi emprendimiento  
es de todos

En consecuencia, el dinero pagado a título de prima por un seguro obligatorio que ofrece cobertura a la Demandante no puede ser objeto de restitución, en cuanto se trata de un beneficio del que efectivamente goza la actora, y, de cualquier forma, tampoco puede ser exigido a mi representada, en cuanto ésta, según las prescripciones legales al respecto, lo pagó a título de contraprestación a la aseguradora que emitió el seguro previsional respectivo.

Por último, si bien es cierto el efecto de la declaratoria de ineficacia es restituir las cosas al estado al que estarían si no hubiese existido el acto o contrato correspondiente, existen excepciones que impiden la aplicación de tal disposición en sentido estricto, como por ejemplo, cuando no se puede retrotraer lo ejecutado por una de las partes, para el caso particular, como se dijo, el contrato de seguro celebrado entre la AFP y la aseguradora, del cual se benefició quien solicita la nulidad, pues gozó, se reitera, de la cobertura de los riesgos derivados de la invalidez y la muerte durante toda la vigencia con la AFP.

## 11. IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN

De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 00161 de mayo 13 de 2010, MP. Edgardo Villamil Portilla, la indexación consiste en *“la actualización monetaria, cuya aplicación deja por fuera aspectos subjetivos, pretende mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda oficial, que se envilece periódicamente en las economías caracterizadas por la inflación, todo bajo la idea de que el pago, sea cual fuere el origen de la prestación, debe ser íntegro, conforme a decantada jurisprudencia en materia de obligaciones indemnizatorias, que a la postre fue recogida por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el cual expone:*

(...)

*la indexación se remonta, según cada caso, al tiempo desde el cual se debe medir un valor determinado que, por efectos de justicia y equidad, ha de permanecer constante a pesar del irresistible paso del tiempo”.*

Adicionalmente, a través de sentencia SL9316-2016 de fecha 29 de junio de 2016, se precisó que la indexación *“es la simple actualización de la moneda para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición inflacionaria de la economía nacional”.*

En consonancia con lo anterior; el artículo 101 de la Ley 100 de 1993 textualmente señala:

*“ARTÍCULO 101. RENTABILIDAD MÍNIMA. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> La totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los Fondos de Pensiones, una vez aplicadas las comisiones por mejor desempeño a que haya lugar, será abonada en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados, a prorrata de las sumas acumuladas en cada una de ellas y de la permanencia de las mismas durante el respectivo período.*

*Las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones deberán garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima de cada uno de los Fondos de Pensiones, la cual será determinada por el Gobierno Nacional”.*

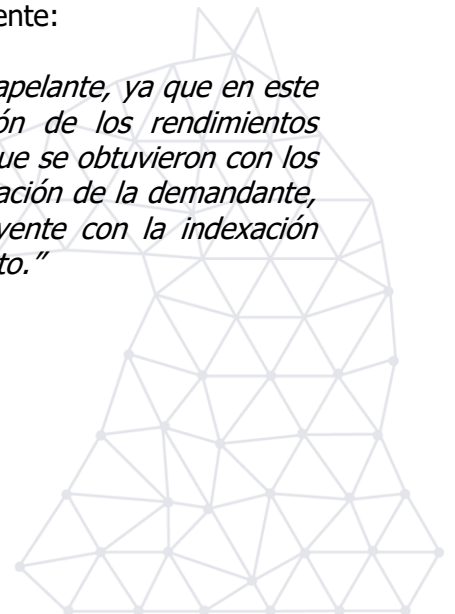
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones que deben cumplir las administradoras de pensiones, se encuentra la de garantizar una rentabilidad mínima en las cuentas de ahorro individual de sus afiliados, resulta incompatible ordenar indexación alguna, pues los recursos de la cuenta de ahorro individual del(a) Demandante no se han visto afectados por la inflación y, por el contrario, han generado rendimientos conforme se observa del estado de cuenta adjunta a la contestación de la demanda.

Refuerza el entendimiento anterior, lo conceptuado por el Honorable Tribunal Superior de Cundinamarca en la Sentencia de radicado 25899-31-05-002-2021-00111-01, donde al examinar un proceso parecido al caso de estudio concluye lo siguiente:

*“Sobre el particular, se considera que le asiste razón a la apelante, ya que en este caso, como lo refiere, se está ordenando la devolución de los rendimientos financieros, rubro este que incluye los frutos e intereses que se obtuvieron con los dineros recibidos por la AFP como consecuencia de la afiliación de la demandante, por lo que entiende la Sala que este rubro sería excluyente con la indexación ordenada, por lo que se revocará la decisión en este aspecto.”*

## **I. EXCEPCIONES DE FONDO**

### **1. PRESCRIPCIÓN**







La legislación Colombiana ha determinado ciertos plazos en los que son exigibles los derechos a través de las acciones que el ordenamiento autoriza para tales fines. Así las cosas, una vez consumado dicho plazo, se pierde la oportunidad para discutir y hacer exigible uno u otro derecho.

En materia laboral, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo determinó un término especial para la prescripción de las acciones. Frente a esto, la norma en comento establece:

**"Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto."** (He resaltado y subrayado)

Por su parte, el Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 151 expone:

**"ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual".** (He resaltado y subrayado).

Aunado a lo que antecede, si nos remitiéramos a los términos de prescripción establecidos en el Código General del Proceso, nos encontramos con que la presente acción fue incoada por fuera de tiempo, pues para obtener la nulidad de un negocio jurídico (en este caso el traslado de la actora al Régimen de Ahorro Individual) deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones normativas:

- i) En lo que se refiere a la nulidad absoluta, el artículo 1742 del Código Civil Colombiano, cuyo texto preceptúa:

**"ARTICULO 1742. OBLIGACION DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria."** (Se subraya fuera del texto)

En concordancia con lo expuesto, el artículo primero (1) de la ley 791 de 2002, frente a la prescripción determinó:



***"Artículo 1º. Redúzcase a diez (10) años el término de todas las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas."***

Frente a la nulidad relativa, el artículo 1750 del Código Civil colombiano, cuyo tener establece:

*"El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.*

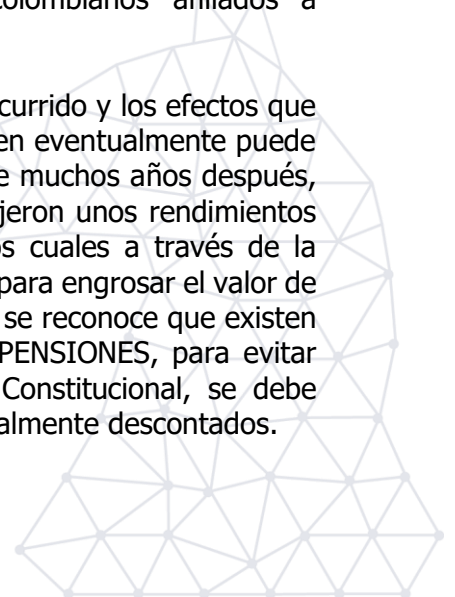
***Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.*** (...) (Se subraya fuera del texto)

En conclusión, la posibilidad de declarar la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad (RAIS) se encuentra prescrita, ya sea por el plazo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, o por el término establecido en el artículo 1750 del Código Civil Colombiano en caso de las nulidades relativas.

## **2. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE ESTOS:**

Si bien es cierto, no prescribe el derecho a la pensión, ni los aportes de los trabajadores, el valor de los gastos de administración no tiene esa misma naturaleza, pues son unos gastos de administración de una cuenta de ahorros, máxime cuando estos no engrosan las cuentas del afiliado que se traslada al RPM, porque al RPM no se llevan cuentas de ahorros, sino que estos dineros van a un fondo común; adicionalmente, es claro que COLPENSIONES no administró la cuenta de la demandante durante la permanencia de la parte actora en el RAIS, pero sí se va a beneficiar de los rendimientos financieros generados por los fondos del RAIS, los cuales van a ser utilizados por todos los colombianos afiliados a COLPENSIONES.

No puede perder de vista el juez, los hechos relevantes que han ocurrido y los efectos que en verdad se producen, porque hay que tener en cuenta que si bien eventualmente puede declararse la ineficacia del acto del traslado, esta ineficacia sucede muchos años después, sin embargo, mientras permaneció válida esta afiliación se produjeron unos rendimientos financieros y unos actos jurídicos a favor de la demandante, los cuales a través de la presente demanda se solicitan sean trasladados a COLPENSIONES para engrosar el valor de los aportes de la demandante; entonces, con el mismo racero que se reconoce que existen unos rendimientos financieros que deben ser trasladados a COLPENSIONES, para evitar incurrir en injusticia e inequidad que son principios de rango Constitucional, se debe reconocer que hubo unos gastos de administración que fueron legalmente descontados.



Y esto es porque hubo unos hechos en el mundo fenomenológico que tuvieron repercusiones en el mundo jurídico, por ejemplo, que existió una cuenta de ahorro individual con unos fondos que produjeron unos rendimientos financieros, y tan verídica es su existencia, que a pesar de la declaratoria de ineficacia, se ordena el traslado de los rendimientos financieros a COLPENSIONES, pero de igual manera no se puede desconocer que las AFP administraron los fondos de la demandante durante muchos años y se los han hecho rendir frutos notables, lo cual no hubiera pasado en COLPENSIONES que solo puede invertir en bonos del tesoro.

Ahora bien, es claro que la financiación de los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin las primas de los seguros de invalidez y de sobrevivencia que corresponden a un 3%, son descontados por fuente legal y no por capricho de los fondos de pensiones, encontrando entonces su origen el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, la cual también dispone que el 1.5% le corresponde al Fondo de garantía de pensión mínima que es un fondo estatal, y se le obliga al fondo a devolver este valor que se lo queda la entidad del Estado que actúa bajo el principio de solidaridad y a esta no se le obliga a devolver esta suma de dinero.

### **3. BUENA FE**

Sin que signifique reconocimiento alguno en favor de la parte Demandante, y de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política, es preciso recordarle al Despacho que **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** siempre ha obrado de buena fe, atendiendo a las imposiciones normativas vigentes para cada momento de su actividad; motivo por el cual es improcedente imponer cualquier tipo de condena desfavorable para sus intereses.

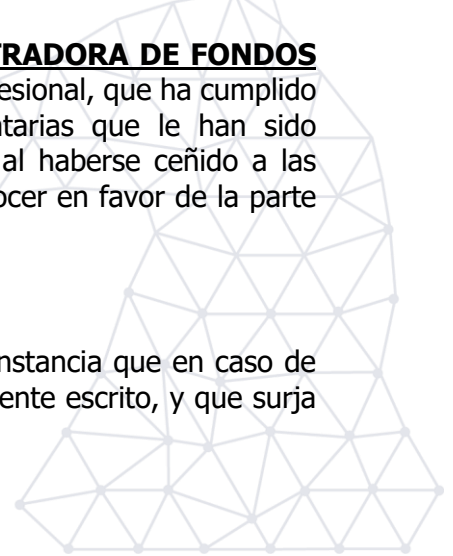
### **4. COBRO DE NO LO DEBIDO POR INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN**

**SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** no se encuentra en la obligación de acceder a las pretensiones de la demanda atendiendo a que no existe causa legal que las sustente. Lo anterior se fundamenta en que la afiliación de la Demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se llevó a cabo atendiendo a las Disposiciones legales y reglamentarias que existían para ese momento.

Debe tenerse en cuenta nuevamente que **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** es una entidad proba y profesional, que ha cumplido desde su nacimiento con las disposiciones legales y reglamentarias que le han sido impuestas. Así las cosas, debe concluirse que mi representada, al haberse ceñido a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, no puede reconocer en favor de la parte actora derecho alguno con ocasión de la presente acción.

### **5. GENÉRICA**

De la manera más cordial y respetuosa le solicito al Juez de instancia que en caso de que encuentre alguna excepción no formulada dentro del presente escrito, y que surja





con en el desarrollo del proceso, la misma sea observada y decretada en favor de mi representada **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**

## **II. PRUEBAS**

Se solicita a la Señora Juez se decreten y se tengan en favor de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** los siguientes medios de prueba:

### **1. INTERROGATORIO DE PARTE.**

Solicito a la señora Juez que fije fecha y hora para que la demandante comparezca a su despacho a absolver el interrogatorio de parte que le formularé con exhibición de documentos.

### **2. DOCUMENTALES:**

Se manifiesta al despacho que la documental allegada con el presente escrito corresponde a la totalidad de documentos que reposan en el archivo pensional de la afiliada.

1. Estado de cuenta individual.
2. Historial de vinculaciones SIAFP.
3. Certificado de traslado a Porvenir en el año 2003.
4. Concepto de la Superintendencia Financiera No. 2019152169-003-000 de fecha 15 de enero de 2020.

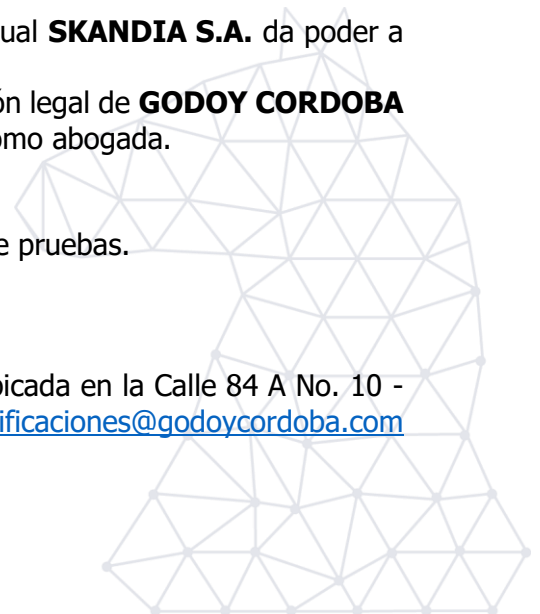
## **I. ANEXOS**

Anexo a la presente contestación de demanda los siguientes documentos:

1. Copia de la escritura pública No. 721, por medio de la cual **SKANDIA S.A.** da poder a **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**
2. Copia simple del certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, en donde me encuentro inscrito como abogada.
3. Copia simple de cedula de ciudadanía de la suscrita.
4. Tarjeta profesional de abogada de la suscrita.
5. Los documentos relacionados en el respectivo acápite de pruebas.

## **II. NOTIFICACIONES.**

Las recibiré en la Secretaría del Juzgado, o en mi oficina ubicada en la Calle 84 A No. 10 - 33 Piso 11 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico [notificaciones@godoycordoba.com](mailto:notificaciones@godoycordoba.com) y [puertas@godoycordoba.com](mailto:puertas@godoycordoba.com)





### **III. TRASLADO DEL ESCRITO A LAS DEMÁS PARTES INTERVINIENTES DEL PROCESO.**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, y en el numeral 14 del art. 78 del Código General del Proceso, se remite el presente memorial con copia a las siguientes direcciones electrónicas de notificaciones:

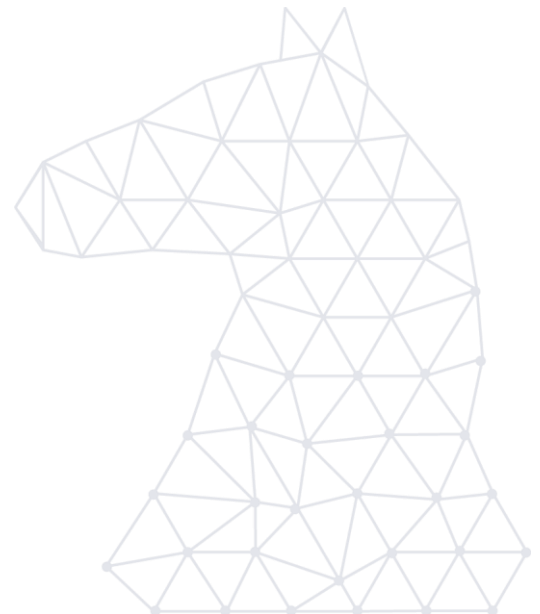
- A COLPENSIONES ([notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co))
- A PORVENIR ([notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co))
- A COLFONDOS ([procesosjudiciales@colfondos.com.co](mailto:procesosjudiciales@colfondos.com.co))
- A LA PARTE DEMANDANTE ([acreyes1212@outlook.com](mailto:acreyes1212@outlook.com))

Del Señor Juez,

**PAULA HUERTAS BORDA**

C.C. 1.020.833.703 de Bogotá

T.P. No. 369.744 del CS de la J.





## Estado de cuenta Skandia Fondos de Pensiones Obligatorias

**SEBASTIANA MONTES CASTRO**  
CRA 19 A Ñ 29C-53 PIE DELA POPA EDIFICIO ERMITA A  
CARTAGENA, BOLIVAR

**C. 45465189**

**CUENTA INDIVIDUAL No.:**

**700000563864**

**FECHA AFILIACIÓN:**

**01/11/2002**

**FECHA ELABORACIÓN:**

**15/09/2023**

NIT EMPLEADOR	EMPLEADOR / CONCEPTO	PERÍODO	DIAS	I.B.C	Movimientos Cuenta Individual				MORA	DESCUENTOS			TOTAL MOVIMIENTOS	F.S.P
					OBLIGATORIO	RENDIMIENTO OTROS FONDOS	VOLUNTARIO AFILIADO	VOLUNTARIO EMPRESA		FGPM	COMISIÓN	SEGURO		
N. 800153836	FONDO DE PENSIONES PORVENIR / TRASLADO DE APORTES OBLIGATORIOS DEL FONDO DE PENSIONES	200210			18,388,478	0	0	0	0	0	0	0	18,388,478	0
N. 800194000	CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA/ APORTE OBLIGATORIO	200211	30	3,215,830	423,026	0	0	0	11,110	0	47,002	62,357	313,666	32,158
N. 800194000	CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA/ APORTE OBLIGATORIO	200212	30	3,215,830	434,137	0	0	0	0	0	48,237	63,995	321,905	32,158
N. 800194000	CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA/ APORTE OBLIGATORIO	200301	30	3,215,830	434,137	0	0	0	0	0	48,237	63,995	321,905	32,158
N. 800194000	CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA/ APORTE OBLIGATORIO	200302	30	3,215,830	425,371	0	0	0	10,327	17,260	44,202	49,978	313,932	32,158
N. 800194000	CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA/ APORTE OBLIGATORIO	200303	30	3,215,830	434,137	0	0	3,860	0	16,079	45,279	51,196	321,583	32,158
N. 800153836	FONDO DE PENSIONES PORVENIR / TRASLADO DE APORTES OBLIGATORIOS AL FONDO DE PENSIONES	200305			-21,770,620	0	0	0	-22,799	0	0	0	-21,770,620	0
	COMISION POR ADMINISTRACION DE APORTES VOLUNTARIOS EMPRESA	202004			0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
N. 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDO / TRASLADO DE APORTES VOLUNTARIOS AL FONDO DE	202004			0	0	0	-21,589	0	0	0	0	0	0
<b>NUMERO DE DIAS COTIZADOS</b>			<b>150</b>											

FONDO	NUMERO DE UNIDADES
Conservador	0.00
Moderado	0.00
Mayor Riesgo	0.00
Retiro Programado	0.00

**OBLIGATORIO** 0.00  
**VOLUNT. AFILIADO** 0.00  
**VOLUNT. EMPRESA** 0.00  
**MORA** 0.00  
**SALDO A 15/09/2023:** 0.00  
**RENDIMIENTOS** 0.00

**El porcentaje de comisión de administración es 2.05 % del IBC, el de seguro es 0.95 % y el de Fondo de Garantía de Pensión Mínima es de 1.50% según lo dispuesto en la ley 797 de 2003 y el decreto reglamentario 510 del mismo año. El porcentaje de FSP es el establecido en las normas citadas. Porcentajes vigentes a la fecha de expedición de este reporte.**

**Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. NIT 800.148.514-2  
Av. 19 No. 109A-30 Tel 6584000 en Bogotá D.C. y Nacional 01 8000 517 526**

USUARIO: SKOORTIZB06

OSCAR MAURICIO ORTIZ BEDOYA

15 de Septiembre de 2023

[Registrar  
servicio](#)

Buscar en Wiki SIAFP 



• Reconstrucción • Usuarios • Afiliados • Pagos • Administrador de Tareas • Estadísticas • Historia Laboral • Actualización de información • Documentos

## Historial de vinculaciones

Hora de la consulta : 5:00:16 PM

Afiliado: CC 45465189 SEBASTIANA MONTES CASTRO

### Vinculaciones para : CC 45465189

<u>Tipo de vinculación</u>	<u>Fecha de solicitud</u>	<u>Fecha de proceso</u>	<u>AFP destino</u>	<u>AFP origen</u>	<u>AFP origen antes de reconstrucción</u>	<u>Fecha inicio de efectividad</u>	<u>Fecha fin de efectividad</u>
Vinculación inicial	1994-10-26	2004/04/16	COLFONDOS			1994-10-26	1997-10-31
Traslado de AFP	1997-09-04	2004/04/16	PORVENIR	COLFONDOS		1997-11-01	1999-06-30
Traslado de AFP	1999-05-21	2004/04/16	COLPATRIA	PORVENIR		1999-07-01	2000-09-30
Traslado de AFP	2000-08-30	2004/04/16	PORVENIR	COLPATRIA		2000-10-01	2002-10-31
Traslado de AFP	2002-09-09	2004/04/16	SKANDIA	PORVENIR		2002-11-01	2003-04-30

5 registros encontrados, visualizando todos registros.

1

### Vinculaciones migradas de Mareigua para: CC 45465189

<u>Fecha de novedad</u>	<u>Fecha de proceso</u>	<u>Código de novedad</u>	<u>Descripción</u>	<u>AFP</u>	<u>AFP involucrada</u>
1994-10-26	1996-06-13	01	AFILIACION	COLFONDOS	
1997-04-01	1997-08-08	07	TRASLADO DE ENTRADA	PORVENIR	COLFONDOS
1997-09-04	1997-09-08	03	TRASLADO DE SALIDA	COLFONDOS	PORVENIR
1999-05-21	1999-06-10	79	TRASLADO AUTOMATICO	COLPATRIA	PORVENIR
2000-08-30	2000-09-11	79	TRASLADO AUTOMATICO	PORVENIR	COLPATRIA
2002-09-09	2002-10-07	79	TRASLADO AUTOMATICO	SKANDIA	PORVENIR
2003-03-20	2003-06-05	46	CORRECCION FECHA AFILIACION	PORVENIR	
2003-03-20	2003-04-28	46	CORRECCION FECHA AFILIACION	PORVENIR	
2003-03-20	2003-04-07	79	TRASLADO AUTOMATICO	PORVENIR	SKANDIA


9 registros encontrados, visualizando todos registros.

1

Imprimir

Regresar

Copyright © 2015 Asofondos. Derechos reservados





**SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**  
**Nit. 800.148.514-2**

**CERTIFICA**

Que SEBASTIANA MONTES CASTRO identificado(a) con C.C 45465189 estuvo afiliado(a) a Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias con el número de contrato **700000563864** desde el 01 de noviembre de 2002 hasta el 30 de abril de 2003.

El día 26 de mayo del 2003 se realizó un traslado hacia PROVENIR S.A de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Cotización Obligatoria	\$ 21,770,620.49
Mora	\$ 22,799.14
COTIZ. VOLUNT. AFILIADO	\$0
Cotización Voluntaria Empresa	\$0
Fondo de Garantía de Pensión Mínima	\$0
<b>TOTAL COTIZACIÓN</b>	<b>\$ 21,793,419.63</b>

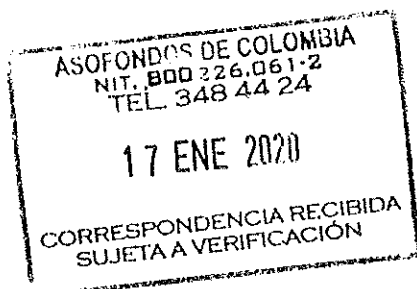
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá el 15 de septiembre de 2023.

Si desea información adicional, con gusto será atendida en nuestro Contact Center escribiendo a [cliente@skandia.com.co](mailto:cliente@skandia.com.co) o llamando al 6584000 en Bogotá, y a la línea 01 8000517526 a nivel nacional.

Cordialmente,

Oscar Mauricio Ortiz Bedoya  
Analista de Servicio al Cliente

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2019152169-003-000

Fecha: 2020-01-15 15:28 Sec.dia722

Anexos: No

Trámite: 116-CONSULTAS ESPECÍFICAS

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 410000-DELEGATURA PARA PENSIONES

Destinatario: 114 - 30-ASOFONDOS - ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CE

Doctora

**Clara Elena Reales**

Vicepresidenta Jurídica

Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías ASOFONDOS

Calle 72 No. 8-24, Oficina 901

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019152169-003-000  
Trámite : 116 CONSULTAS ESPECÍFICAS  
Actividad : 39 RESPUESTA FINAL E  
Expediente : AFILIAC-PENS-DEV  
Anexos :

Respetada doctora Clara Elena:

Con todo gusto damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, en la cual, después de realizar una breve alusión al marco normativo que regula lo concerniente a la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, plantea tres interrogantes sobre el trato que debe darse a los aportes pensionales cuando se configuran las situaciones reseñadas.

Al respecto, previo a dar respuesta a los interrogantes que se relacionan en su escrito este Despacho encuentra oportuno hacer las siguientes consideraciones en relación con la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, así:

El Sistema General de Pensiones (SGP), creado por la Ley 100 de 1993, integra dos regímenes pensionales excluyentes entre sí pero que coexisten, estableciendo, entre otras características, la posibilidad de trasladarse libremente entre estos atendiendo unos términos mínimos de permanencia y edad, así como la de sumar de las cotizaciones hechas en ambos para efectos de reunir las condiciones que dan derecho a las prestaciones que este Sistema otorga a sus afiliados.

No obstante, en cuanto a las prestaciones que se reconocen en uno y otro régimen, el legislador dispone reglas que no permiten que su resultado sea comparable, si bien su finalidad es en ambos casos la *"garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones"*<sup>1</sup>, en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM), los afiliados obtienen prestaciones cuyas condiciones y montos se encuentran definidos en la ley y en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) las pensiones y prestaciones que se reconocen dependen directamente de los valores ahorrados en la cuenta individual de los afiliados<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Artículo 10 de la Ley 100 de 1993

<sup>2</sup> Sobre el tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-538 del 16 de octubre de 1996, destacó como principales diferencias las siguientes:

<sup>3</sup> En el régimen de prima media con prestación definida los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas en la ley.

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01

[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento  
es de todos

Una banca  
para todos



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es importante considerar que el legislador en el diseño de la estructura de este Sistema tuvo en cuenta razones como *la viabilidad financiera, la falta de equidad y la baja cobertura del mismo*, las deficiencias administrativas, pero también se optó por un sistema que estimulara la libre competencia entre Regímenes y el ejercicio del derecho a elegir el régimen pensional y la administradora por parte de los afiliados, según sus intereses.

Sin embargo, las diferencias de origen legal entre los regímenes pensionales que pueden derivar en prestaciones de distintas cuantías generan inconformidades entre los afiliados que, después de cumplidos los años para pensionarse, encuentran un mejor beneficio en el régimen contrario, por lo que tienden a solicitar el traslado por fuera del término legal o la anulación de la afiliación.

En ese sentido, debe decirse que el marco legal<sup>3</sup> para la procedencia de los traslados entre regímenes es claro y no da lugar a interpretaciones diferentes más allá del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas. Resulta evidente además que, en aras de salvaguardar los derechos de los afiliados, en distintas épocas desde la vigencia del Sistema General de Pensiones, se ha dado la posibilidad de regresar al régimen del cual se habían trasladado, sin contar que desde el inicio del SGP, una vez decidido el traslado, el afiliado tiene derecho al retracto.

El sistema dual acogido en el sistema pensional colombiano, es desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política, de allí que el legislador dentro de su libertad de creación normativa hubiese proferido la Ley 100 de 1993 para generar un correcto funcionamiento de la seguridad social con solidaridad, entendido este como un servicio público de carácter obligatorio, que se encuentra bajo la dirección y responsabilidad del Estado y que a su vez cuenta con la participación de los particulares, para de esta forma atender las prestaciones que se derivan de los riesgos del trabajo y de la necesidad de otorgar a las personas los medios para una subsistencia digna, cuando en razón de la edad ya no disponen de una adecuada capacidad de trabajo.

Quiere ello decir que no se podría a través de la Ley 100 de 1993 ni de sus decretos reglamentarios menoscabar las libertades individuales de las personas, entre ellas, la libertad de escogencia (libertad contractual), para lo cual es preciso revisar lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil, el cual reza:

**"ARTICULO 1502. <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>.** Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

- 1o.) que sea legalmente capaz.
- 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
- 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.
- 4o.) que tenga una causa lícita.

---

En este régimen son aplicables disposiciones vigentes para los sistemas de invalidez, vejez y muerte a cargo del I.S.S. y además las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley 100/93 (art. 31).

Dicho régimen se caracteriza porque los aportes de los afiliados y empleadores y sus rendimientos integran un fondo común de naturaleza pública, mediante el cual se garantiza el pago de las prestaciones a cargo de los recursos de dicho fondo, los gastos administrativos y las reservas, de acuerdo con la ley.

El administrador exclusivo de dicho régimen es el Instituto de Seguros Sociales, pues fue la única entidad que quedó autorizada para continuar afiliando trabajadores en lo sucesivo; por lo tanto, quedó planteada la competitividad entre dicha entidad y los administradores -fondos de pensiones- del sistema de ahorro individual de pensiones.

En el sistema de ahorro individual con solidaridad se incorporan y administran recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. Está basado en los recursos del ahorro, administrados en cuentas de propiedad individual de los afiliados, proveniente de las cotizaciones hechas por los empleadores y trabajadores, más los rendimientos financieros generados por su inversión y, eventualmente, de los subsidios del Estado.

(...) Evidentemente al comparar los dos sistemas de pensiones, encuentra la Corte las siguientes diferencias:

• Los requisitos para obtener la pensión de vejez en el sistema de prima media (art. 33) son: haber cumplido 55 años de edad si es mujer, o 60 años de edad si es hombre y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. El monto mensual de la pensión de vejez se determina así: por las primeras 1000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación; por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2% llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente (art. 34), que no podrá ser inferior al valor del salario mínimo mensual vigente y que tiene la garantía estatal a que alude el art. 138.

• En el sistema de ahorro individual con solidaridad, el derecho a la pensión de vejez, en las diferentes modalidades (renta vitalicia inmediata, retiro programado o retiro programado con renta vitalicia o cualesquiera otras autorizadas) se causa en favor del afiliado a la edad que cada uno de ellos escoge, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de expedición de la ley, o reajustado según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, o cuando opte por seguir cotizando, en las circunstancias descritas por el art. 64.\* (Subraya fuera de texto)

<sup>3</sup> literales b y e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, Artículo 2.2.2.1. del Decreto 1833 de 2016 que incorpora el artículo 3° del Decreto 1161 de 1994. Parágrafo del artículo 2° del Decreto 1642 de 1995, Artículo 12 del Decreto 3995 de 2008

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01

www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra."*

En consonancia con lo anterior, podría decirse que dentro de lo que aquí se analiza, no es materia de discusión que el objeto y la causa en el traslado entre regímenes sean lícitas (existe todo un marco legal que así lo determina), ahora bien, en cuanto a que la persona sea considerada capaz debe verificarse que se den los presupuestos normativos dispuestos en los artículos 1503 y 1504 ibídem.

Respecto del consentimiento para obligarse al momento de suscribir el contrato de afiliación a los distintos regímenes, el numeral 2 del artículo 1502 señala que dicho consentimiento no debe adolecer de vicio alguno, los cuales son determinados en el artículo 1508 ibídem como error, fuerza y dolo, este, es sin dudas el punto crítico y de mayor problemática actualmente.

En relación con el consentimiento informado y libre, es decir, exento de vicios, considera este Despacho que se trata de un asunto meramente probatorio, que debe ser analizado y debatido en juicio, y que a su paso son los jueces de la república los responsables de valorar concienzudamente las pruebas aportadas tanto por administradoras como por afiliados, revisando además las posibles implicaciones financieras que conllevaría para el sistema, ordenar la nulidad de una afiliación, así como el traslado de regímenes.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia SU 062 de 2010 desarrolla la importancia de la prevalencia del orden económico, y al respecto indica: *"La efectividad del derecho a cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y legal vigente depende de que éste pueda ser ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos obstáculos es precisamente impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos adicionales en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro individual sea inferior al monto del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media con prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los recursos necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a rendimientos diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido. Esto no sólo es necesario dentro del régimen general, sino también en los regímenes especiales con el fin de conciliar el ejercicio del derecho del interesado en acceder a la pensión y el objetivo constitucional de asegurar la sostenibilidad del sistema pensional."* (subraya fuera de texto)

Como precedente de la anterior Sentencia de Unificación, el Alto Tribunal indicó en la Sentencia C-1024 de 2004, que *"(...) el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...) Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)"* (Subraya fuera de texto)

En línea con lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, esta Superintendencia considera que, al momento de evaluarse las solicitudes y demandas de traslado de régimen pensional, debe adoptarse por los operadores administrativos y judiciales criterios tales como: i) el objetivo constitucional de estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional en el que con miras a proteger el orden económico del sistema no es viable efectuar traslados sin el monto de aportes necesarios en cada régimen, y ii) el mantenimiento del orden legal, que puede verse afectado al autorizar o conceder solicitudes de traslados sin el cumplimiento de los requisitos legales toda vez que se dejaría sin piso los criterios de interpretación a la normativa aplicable.



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, en consideración de este Despacho, la revisión que se hace a las solicitudes de traslado de régimen por vía judicial, debiera apoyarse en criterios técnicos en los que se determine que no se generará una afectación al Sistema General de Pensiones, atendiendo para ello los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

Respecto de los tres interrogantes, esta Superintendencia estima importante además señalar que la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación al Sistema General de Pensiones que se resuelva judicialmente, debe ser atendida por los actores en los términos que se disponga en los fallos judiciales correspondientes, teniendo en cuenta que, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, esta Superintendencia no puede en desarrollo de sus funciones jurisdiccionales conocer de ningún asunto de carácter laboral.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta la relevancia del asunto consultado y las posibles implicaciones que tiene para el Sistema General de Pensiones, se emite el siguiente concepto con el alcance indicado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

### a. Vinculación al Sistema General de Pensiones y destinación de los aportes.

Es necesario precisar que la vinculación al Sistema General de Pensiones se realiza a través de la suscripción del formulario de afiliación, este formulario hace las veces de contrato, en el que ambas partes se obligan de manera recíproca. Entre las principales obligaciones tenemos, por un lado, la de efectuar los aportes que correspondan legalmente y, por otro, recibir, administrar y conceder (ante el cumplimiento de los requisitos normativos) las prestaciones a que haya lugar.

Específicamente, en relación con las cotizaciones efectuadas en el Sistema General de Pensiones, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, determina la distribución que deben efectuar las administradoras del mismo, tanto en el Régimen de Prima Media con Solidaridad –RPM- como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-RAIS-, señalando entre otros lo siguiente:

*“Artículo 20. La tasa de cotización continuará en el 13.5%\* del ingreso base de cotización.*

*En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.*

*En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.*

*A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.*

*(...) Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993.”*

De allí, que el 3% de la cotización de los aportantes se destina a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento de los recursos pensionales en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-el literal d) del artículo 60 de la mencionada Ley 100, se establece que el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

constituye un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la Administradora.

De la misma manera, en el artículo 100 de la Ley 1003 se establece que, con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras invertirán los recursos de los fondos en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, que hoy se encuentra recogido en el Decreto 2555 de 2010.

Corresponde en este punto precisar que, en el Régimen de Ahorro Individual, los aportes de los afiliados que ingresan al fondo deben cumplir con los requisitos mínimos e invertirse en papeles y activos permitidos, tales como TES, bonos, CDT y acciones, entre otros. Es decir, el dinero que aporta un afiliado para su cuenta individual se encuentra representado en las inversiones que realiza el fondo, donde cada afiliado tiene una cuenta de ahorro individual que se ve representada en unidades de participación del fondo. Dichas inversiones deben ser valoradas diariamente por los Fondos de Pensiones y de Cesantía, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 expedida por esta Superintendencia.

Por lo tanto, las cuentas individuales de los afiliados varían no solo con los aportes y retiros que estos realizan, sino también, por las variaciones en el valor de mercado de las inversiones que conforman los portafolios, las cuales cambian de forma diaria como consecuencia de los cambios en las tasas de interés y de los precios de los diferentes títulos que conforman los citados portafolios; situaciones propias del mercado de valores que fluctúan por factores tanto internos como externos que originan caídas o subidas en los precios de los títulos y demás inversiones y que no dependen del control y gestión de las Administradoras de los Fondos de Pensiones y de Cesantía.

Ahora bien, tal y como se observa en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, las Sociedades Administradoras deben garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima en el manejo de los fondos que administran y, en caso de haber un incumplimiento a esta rentabilidad, la misma se garantiza con el patrimonio de dichas sociedades y con la reserva de estabilización. Esta reserva corresponde al 1% del valor del fondo administrado (pensiones obligatorias o cesantías) y debe estar invertida en las mismas condiciones que el correspondiente fondo.

Así mismo, en relación con el porcentaje destinado las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, se encuentra que dichos recursos son sufragados mensualmente, y destinados como lo ordena la norma a la aseguradora contratada, de esta forma el citado porcentaje como bien lo menciona en su oficio, permite a la aseguradora mantener la cobertura respecto del afiliado en relación con los riesgos asegurados (invalidez y muerte) durante la vigencia del seguro.

### **b. Traslado de recursos entre regímenes del Sistema General de Pensiones SGP**

Vale la pena resaltar lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 en el cual, respecto del traslado de recursos entre regímenes del SGP, se establece lo siguiente:

*“Artículo 7°. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:*

*Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.*

*Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.*

*Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, RPM, la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el*



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos.

**Parágrafo.** Con ocasión de la definición de la múltiple vinculación de sus afiliados y la determinación de las sumas a trasladar, las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones quedan facultadas para compensar, total o parcialmente, los saldos respectivos" (Subraya fuera de texto).

De esta manera, la normatividad existente permite inferir, que, en caso de resultar necesario un traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, lo procedente, además del traslado de la información correspondiente a la historia laboral del afiliado, es el traslado del valor de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos.

Conforme con lo expuesto, de decretarse la ineficacia del acto jurídico de cambio de régimen pensional y/o la nulidad de la afiliación alguno de los regímenes pensionales del SGP, lo que implica el traslado de recursos y de información de un régimen a otro, debe darse la aplicación de lo dispuesto en la norma atrás citada, respetando la destinación de los aportes pensionales realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora que genera los rendimientos que se trasladan a la administradora de destino.

En ese orden de ideas, frente a los interrogantes tenemos:

1. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y reconocer los gastos de administración a la administradora de pensiones, tal como establece el artículo 1746 del Código Civil, y solo se debe girar el valor de la cuenta de ahorro individual, con sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos?***

Teniendo en cuenta los argumentos atrás planteados, y sin perjuicio de lo que se haya ordenado en algunos de los fallos judiciales correspondientes, este Despacho considera que, al decretarse la nulidad e ineficacia de la afiliación procede el traslado de los saldos de la cuenta de ahorro individual del afiliado, que incluye lo correspondiente a los rendimientos generados como consecuencia de la administración de los recursos efectuada por la administradora, así como los porcentajes destinados a la garantía de la pensión mínima y sus respectivos rendimientos.

2. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y excluir las sumas que por concepto de prima de seguro previsional fueron sufragadas a favor del afiliado mientras estuvo vigente su afiliación, dado que la compañía aseguradora mantuvo la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte de su asegurado durante la vigencia del seguro, y además por cuanto operó la figura de la prima devengada?***

En igual sentido, en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la compañía aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado; sin perjuicio de la vinculación que a este tipo de procesos se haga a las aseguradoras que han sido contratadas para dichos fines, para que puedan ejercer la defensa de sus intereses.

3. ***Conforme al marco normativo vigente, ¿sería válido el siguiente tratamiento legal que han de recibir los aportes recibidos, cuando por virtud de la declaratoria judicial de nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, el afiliado debe retornar al RPM?***

Concepto	Devolución
Cuenta de Ahorro Individual (Aportes y Rendimientos)	Si
FGPM (aportes y rendimientos)	Si
Prima de Seguro Previsional	No
Comisión Administración	No

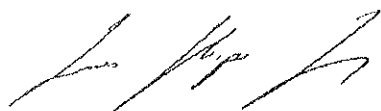


## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este Despacho estima válido el tratamiento legal que se plantea en este interrogante, lo anterior, sin perjuicio de las decisiones adoptadas por los tribunales e inclusive por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre judicial, quienes cuentan las facultades legales para adoptar la posición que en derecho encuentren pertinente.

De esta manera dejamos atendido el objeto de su consulta, con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



LUIS FELIPE JIMENEZ SALAZAR  
410000-DELEGADO PARA PENSIONES  
DELEGATURA PARA PENSIONES

Copia a:

Elaboró:  
JULIANA SIERRA MORALES

Revisó y aprobó:  
--JULIANA SIERRA MORALES  
DERLY JULIET ALARCON PARRA  
DERLY JULIET ALARCON PARRA









# República de Colombia

1



SDC624569107 SDC72662335

**NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ.**

**ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 721** -----

**NÚMERO: SETECIENTOS VEINTIUNO** -----

**FECHA DE OTORGAMIENTO: VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020)** -----

**CLASE DE ACTO: PODER GENERAL.**-----

**PODERDANTE:**

SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. con NIT. 800.148.514-2 Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

**SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA.** con C.C. No. 53.177.012. -----

**APODERADA:**

**GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**

**N.I.T. 830.515.294-0**----

En

la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), ante mí, **PATRICIA HERRERA REINA**, Notaria Cuarenta y Tres (43) *Encargada* de este Círculo nombrada mediante resolución número 5801 de fecha 30 de junio de 2020 expedida por la S.N.R, se otorgó la escritura pública que se consigna en los siguientes términos:-----

**COMPARECIÓ: (con minuta por correo) SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en Bogotá, Departamento de Cundinamarca, identificada con cédula de ciudadanía número **53.177.012** expedida en Bogotá, quien obra en calidad de calidad de Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** con NIT. **800.148.514-2**, con domicilio en Bogotá D.C., sociedad debidamente constituida por escritura pública número cuatro mil trescientos siete (4.307) de fecha seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991) otorga en la Notaría treinta y cinco (35) de Bogotá, posteriormente modificada por instrumentos públicos debidamente inscritos, como se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Superintendencia Financiera De Colombia, que se protocoliza con el presente instrumento, y manifiesto que confiero **PODER GENERAL, AMPLIO y SUFICIENTE**,

PATRICIA HERRERA REINA

Notaria 43 Encargada

SDC624569107

AKHQARFQR3ITNOR



a la sociedad, denominada **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y con NIT 830.515.294-0, en la actualidad representada legalmente por la señora **VERÓNICA DIAZ DEL CASTILLO ROMÁN**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.698.501 y cuyo objeto social principal es la prestación de servicios de asesoría jurídica, para que en su calidad de **APODERADA** y a través de cualquiera de los abogados inscritos en el Certificado de Existencia y Representación Legal de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso represente y ejecute los siguientes actos en nombre de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**:

**a) REPRESENTACIÓN:** Para que ejerza la representación legal y judicial de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** en las acciones judiciales o administrativas que esta entidad deba adelantar o que se adelanten en su contra ante cualquier entidad pública, privada o judicial y sus organismos vinculados o adscritos. En desarrollo de esta facultad podrá notificarse de todas las providencias judiciales o administrativas, presentar reclamaciones, derechos de petición, instaurar o contestar demandas en las que sea parte **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, llamar en garantía, asistir a audiencias, absolver interrogatorios de parte, recibir, comprometer, presentar recursos y, en general, ostentará todas las facultades previstas en el artículo 77 del Código General del Proceso. -----b)

**DESISTIMIENTOS Y RENUNCIAS:** Para que desista de los procesos, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que se promuevan. -----

**c) TRANSIGIR Y CONCILIAR:** Para que transija y concilie pleitos y diferencias que ocurran respecto de los derechos y obligaciones de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** conforme a las instrucciones dadas por el poderdante, además para que asista en calidad de representante legal de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** a las audiencias de conciliación judiciales, con todas las facultades inherentes al





mandato establecidas en el artículo 77 del CGP, inclusive la de conciliar, conforme a las instrucciones dadas por el poderdante.

d) Las demás actuaciones que se requieran de manera que SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A se encuentre debidamente representado en los asuntos que trata el presente poder. —

**EL(LA) COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE:** 1.- Verificó cuidadosamente sus nombres y apellidos, los números de su documento de identidad y demás datos, y por lo tanto, aprueba este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. 2.- Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y, en consecuencia, asume la responsabilidad de lo manifestado. 3.- Conocen la Ley y saben que el Notario responde únicamente de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que formen parte del mismo. (Arts. 9 y 35 Decreto Ley 960/1970). LA NOTARÍA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES ESTABLECIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LOS OTORGANTES Y DEL NOTARIO. Las aclaraciones, modificaciones o correcciones que tuvieran que hacerse deberán ser subsanadas mediante el otorgamiento de una nueva escritura suscrita por quienes intervinieron en la inicial y sufragada por ellos mismos. (Art. 102 Decreto Ley 960/1970).

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN** Hecho este instrumento por el compareciente, dio su asentimiento a todas y cada una de sus partes y al acto en general; fue advertido sobre las formalidades legales, lo aprobó y firmó ante mí y conmigo el Notario quien en esta forma lo autorizo y doy fe.

Esta escritura pública se extendió en las hojas de Papel Notarial de seguridad Nos.: SDO424569108 SDO624569107

**DERECHOS NOTARIALES** (Resolución No. 1299 DE 2020)

DERECHOS NOTARIALES: \$ 61.700

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$6.600

FONDO NACIONAL DE NOTARIADO \$ 6.600 I.V.A: \$ 17.841



OTORGANTE:

SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA C.C. No. 58199012 de Bogotá

Quien obra en calidad de Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

con NIT. 800.148.514-2 Dirección: No. 19 No. 11 A 30.

Teléfonos: 658 4300

Actividad Económica: Abogada.

Correo Electrónico: cliente@skandia.com.co.

DATOS DE LA APODERADA: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. con N.I.T.  
830.515.294-0

Dirección: Calle 82 N. 10 -33 Piso 5.

Teléfonos: 317 4628

Actividad Económica: Servicios Jurídicos.

Correo electrónico: agodoylegodoycordoba.com.

NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

PATRICIA HERRERA REINA

Radicar: FS Elaborar: FS Liquidar: FS Tomo Firmas: FS Revisar:

COPIA COPIA COPIA



**Notaria  
43**

**Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012**

Bogotá D.C., 2020-07-23 15:58:18 Documento: 64v8m

Ante mi el suscrito Notario Cuarenta y tres del Circulo de Bogotá D.C. comparecio:

**FONSECA CORREA SANDRA VIVIANA**

Identificado con C.C. 53177012

Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com) para verificar este documento.



FOTO

160-63d64ff7

**NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE  
BOGOTÁ D.C.**



SDC326623373

**Notaria 43 Encargada**

SDC326623373



QADJHL4SR1A0NSE

04/05/2020

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.  
**ESPACIO EN BLANCO**  
PROTOCOLO

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.  
**ESPACIO EN BLANCO**  
PROTOCOLO





SDC726622036

Es primera copia tomada de su original:  
escritura pública N° 321 de 23 de Julio / 2020  
que expidió y autorizó en 14 hojas útiles  
con destino a: 61 Argente  
Papel Art. 6° Ley 20 de 1976  
Bogotá D.C. 27 JUL 2020

*[Handwritten signature]*



**CERTIFICADO DE VIGENCIA  
LA NOTARIA CUARENTA Y TRES (43)  
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.**

**CERTIFICA:**

QUE EN EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA PUBLICA A  
QUE SE REFIERE LA PRESENTE COPIA NO APARECE  
NOTA DE REVOCATORIA.

27 JUL 2020

DOY FE BOGOTÁ D.C.

*[Handwritten signature]*



Notaria 43 Encargada  
SDC726622036



JXW8CSTSPAUCQ0A5Y

04/05/2020





SDC220623383

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LÍMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S."

Nit: 830.515.294-0 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565

Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005

Último año renovado: 2019

Fecha de renovación: 29 de marzo de 2019

Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Calle 82 N° 10 - 33 Piso 5

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: agodoy@godoycordoba.com

Teléfono comercial 1: 3174628

Teléfono comercial 2: No reportó.

Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Calle 82 N° 10 - 33 Piso 5

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación: agodoy@godoycordoba.com

Teléfono para notificación 1: 3174628

Teléfono para notificación 2: No reportó.

PATRICIA HERRERA REINA  
Notaria 43 Encargada

SDC226623383

IAR1LJ7PVLGNSR89

04/05/2020



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20  
Recibo No. AA20535814  
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S."

Que por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad





50CA70623362

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20  
Recibo No. AA20535814  
Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Que por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tiene por objeto social principal la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. En todo caso, la sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor	:	\$10.000.000.000,00
No. de acciones	:	10.000.000,00
Valor nominal	:	\$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor	:	\$152.683.000,00
No. de acciones	:	152.683,00
Valor nominal	:	\$1.000,00



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$152.683.000,00  
No. de acciones : 152.683,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la junta directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la junta directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la junta directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva; E) Presentar oportunamente a la consideración de la junta directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la junta directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el informe especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la asamblea general de accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la





SDC626623381

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos.

Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la junta directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas- exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Notaría 43 Encargada

SDC626623381

7UDDPT4N8OCM3YCX

04/05/2020



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019 registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Guerrero Orbe Diego Alexander	c.c. 1.018.426.052	222.814
Barros Cardenas Jhon Alex	c.c. 1.043.015.010	287.301

**CERTIFICA:**

Que por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 27 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Vergel Ramirez Laura	c.c. 1.090.469.651	321.394
Rey Londoño Oscar Alberto	c.c. 1.140.866.487	300.858

**CERTIFICA:**

Que por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 2 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo	c.c. 1.151.946.356	253.718
Carolina Martinez Pelaez	c.c. 1.037.612.591	252.761
Gabriela Restrepo Caicedo	c.c. 1.144.193.395	307.837
John Jairo Rodriguez Bernal	c.c. 1.070.967.487	325.589
Juan Sebastian Sanchez Amaya	c.c. 1.022.398.006	310.573
Luis Miguel Diaz Reyes	c.c. 1.018.464.896	331.655
Maria Alejandra Serrano Ceballos	c.c. 1.144.084.440	325.295
Omar Alonso Camargo Mercado	c.c. 1.043.010.907	285.256
Paula Andrea Arboleda Villa	c.c. 1.152.201.387	270.475
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	c.c. 1.013.641.075	278.768

**CERTIFICA:**

Que por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).





**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20  
Recibo No. AA20535814  
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: Chavez Alvarado Andres Felipe Identificación: T.P  
c.c. 1.075.655.441 232007

**CERTIFICA:**

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	c.c. 80.873.156	175488
Lara Marquez Amarante Andrea	c.e. 527.443	283576
Benrey Zorro Juliana	c.c. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	c.c. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	c.c. 1.121.914.728	288455
Cano Gonzalez Claudia Andrea	c.c. 1.143.869.669	338180

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Godoy Cordoba Andres Dario	C.C. No. 000000080086521
Primer Suplente Del Gerente	Godoy Fajardo Carlos Hernan	C.C. No. 000000019251626

Mediante Acta No. 22 del 11 de agosto de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2016 con el No. 02132210 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo	Diaz Del Castillo	C.C. No. 000000052698501

Notaria 43 Encargada

IYSPHKDBY2ZX2EDA

04/05/2020



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente Del Roman Veronica  
 Gerente

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

**JUNTA DIRECTIVA**

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Godoy Fajardo Carlos	C.C. No. 000000019251
Segundo Renglon	Hernan Gnecco Mendoza	C.C. No. 000000019431
Tercer Renglon	Gustavo Jose Godoy Cordoba Andres Dario	C.C. No. 000000080086

SUPLENTE CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

Mediante Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Godoy Fajardo Carlos Hernan	C.C. No. 000000019251
Tercer Renglon	Godoy Cordoba Andres Dario	C.C. No. 000000080086

SUPLENTE CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Acta No. 36 del 1 de junio de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2018 con el No. 02347445 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**  
**CARGO**

**NOMBRE**

**IDENTIFICACIÓN**

Segundo Renglon	Gnecco Mendoza	C.C. No. 000000019431641
	Gustavo Jose	

**REVISORES FISCALES**

Mediante Acta No. 14 del 27 de marzo de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2014 con el No. 01825090 del Libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
--------------	---------------	-----------------------

Revisor Fiscal	Perez Echeverry	C.C. No. 000000031150288
	Socorro	

**PODERES**

Que por documento privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:  
ANA CRISTINA MEDINA GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 52.991.736

NOMBRE:  
CARLOS HERNÁN GODOY FAJARDO

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 19.251.626

NOMBRE:  
FRANCISCO ERNEY BURITICÁ RUIZ

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 10.529.620

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20  
Recibo No. AA20535814  
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ANDRÉS FERNANDO DA COSTA HERRERA

C.C. 80.505.099

NOMBRE:  
GUSTAVO GNECCO MENDOZA

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 19.431.641

NOMBRE:  
SANTIAGO ANDRÉS MARTÍNEZ MÉNDEZ

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 81.717.493

NOMBRE:  
MARÍA ISABEL VINASCO LOZANO

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 53.006.455

NOMBRE:  
JHON SEBASTIÁN MOLINA GÓMEZ

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.018.466.887

NOMBRE:  
SERGIO ANDRÉS CAMPOS GUZMÁN

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.015.433.588

NOMBRE:  
DIANA LUCIA SAAVEDRA CASTAÑEDA

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.026.579.845

NOMBRE:  
JOSÉ DAVID OCHOA SANABRIA

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.010.214.095

NOMBRE:  
CESAR AUGUSTO ORJUELA CÁCERES

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 80.793.573

NOMBRE:  
JOHANA ALEXANDRA DUARTE HERRERA

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 53.077.146

NOMBRE:  
YAT SING CHÍA MUÑOZ

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.018.445.390

NOMBRE:  
JENNIFER LORENA MOLINA MESA

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.129.511.816

NOMBRE:  
DANIEL MAURICIO CONTRERAS JAIMES

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.090.424.399

NOMBRE:  
ÁNGELA MARÍA MORA PARRA

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 1.020.780.646

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:





SDC226623378

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20  
Recibo No. AA20535814  
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FABIO ANDRÉS SALAZAR RESLEN

C.C. 1.032.358.377

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

RICARDO JOSÉ AGUIRRE BEJARANO

C.C. 1.018.442.942

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

ERNESTO ROSALES JARAMILLO

C.C. 1.090.420.262

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

JUAN SEBASTIÁN VELANDIA PÁRRAGA

C.C. 1.018.456.181

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

**DOCUMENTO**

E. P. No. 0002230 del 26 de junio de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.

**INSCRIPCIÓN**

01147130 del 26 de julio de 2007 del Libro IX

Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios

01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX

Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas

02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX

Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX

Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX

Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6910

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

Notaría 21 de Bogotá

SDC226623378

SKMXKFGQ94X74Y28

04/05/2020



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005.  
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 2 de marzo de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.00 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 528 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.





SDC426623377

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

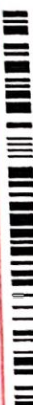
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*Constante Penta*

Procuraduría General del Estado  
Notaria 42 Encargada

SDC426623377



8819IU59SKJXNHZE

04/05/2020

NOTARIA DE BOGOTÁ D.C.  
PROTOCOLO  
**ESPACIO EN BLANCO**

NOTARIA DE BOGOTÁ D.C.  
PROTOCOLO  
**ESPACIO EN BLANCO**



Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612



SDC626623376

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN****EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 1848 del 15 de noviembre del 2016.

**CERTIFICA****RAZÓN SOCIAL:** SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,  
**PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA SIGLA:** SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**NATURALEZA JURÍDICA:** Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Escritura Pública No 4307 del 06 de diciembre de 1991 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS SKANDIA S.A.

Escritura Pública No 1007 del 10 de marzo de 1993 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo utilizar en el desarrollo de su objeto social la abreviación ASKANDIA S.A.

Escritura Pública No 511 del 02 de febrero de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 6394 del 21 de diciembre de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se protocolizó el acuerdo de fusión mediante el cual, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS absorbe a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PENSIONAR S.A. Sigla: PENSIONAR, quedando esta última disuelta sin liquidarse.

Escritura Pública No 3361 del 19 de diciembre de 2013 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por el de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 1323 del 13 de junio de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD MUTUAL - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 2413 del 03 de octubre de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de OLD MUTUAL - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. pudiendo usar la sigla OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 570 del 03 de abril de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. por la de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)El emprendimiento  
es de todosMinisterio de  
Economía



Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

# ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., OLD MUTUAL F  
CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.  
Escritura Pública No 2498 del 16 de diciembre de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C.  
modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES  
pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CES  
OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CES  
por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pu  
desarrollo de su objeto social utilizar la sigla SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Resolución S.B. 4754 del 02 de diciembre de 1991  
Resolución S.B. 4754 del 12 de diciembre de 1991 Esta entidad autorizó a la citada sociedad para  
las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de  
de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTÍAS.  
Resolución S.B. 2484 del 22 de diciembre de 1998 Esta entidad autorizó a la citada sociedad para  
fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La Representación Legal de la Sociedad estará a cargo de un Presidente  
un Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si la Junta Directiva considera necesario por  
último cargo. Tanto el Presidente como el Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales  
miembros de la Junta Directiva y ser reelegidos indefinidamente. El Presidente de la Sociedad tendrá  
Suplentes: Primero (1°), Segundo (2°) y Tercero (3°) quienes en su orden ocuparán la Presidencia  
Sociedad en los casos de faltas absolutas temporales o accidentales del titular. Por su parte el Representante  
Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si este cargo se provee, podrá tener, si la Junta Directiva lo  
necesario, un suplente que lo reemplazará en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales.  
entenderá que la representación legal de la sociedad es múltiple. **FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA**  
**SOCIEDAD:** El Presidente tendrá todas las facultades y obligaciones propias de la naturaleza del cargo,  
especial las siguientes: a) Ser Representante Legal de la Sociedad ante los Accionistas, ante terceros,  
toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional; b) Ejecutar u ordenar todos los  
operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes, en estos Estatutos  
en las decisiones de la Junta Directiva; c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente  
la Junta Directiva, un Balance General de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la  
Sociedad, un detalle completo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y un Proyecto de Distribución de  
Utilidades; d) Tomar todas las medidas que reclame la conservación y seguridad de los bienes sociales,  
terceros y de los patrimonios que administre, vigilar la actividad de los empleados de la Sociedad e in  
las órdenes e instrucciones que exija el normal desarrollo de la empresa social; e) Convocar a la Asamblea  
General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o conveniente y hacer las convocatorias  
de los (sic) Fondo de Pensiones; f) Convocar a la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la Sociedad o el Revisor  
cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informado a tal organismo del curso de los asuntos  
sociales; g) Presentar a la Junta Directiva el Balance del ejercicio y suministrar todos los informes de la  
Asamblea General y la Junta Directiva; h) Cumplir órdenes e instrucciones que le imponga la Junta  
requiera el buen giro de las actividades sociales. Cuando se trate de apoderados generales se requerirá  
autorización previa de la Junta Directiva; i) Delegar parcialmente sus funciones y constituir los apoderados  
exigencias que se relacionen con la existencia, funcionamiento y actividades de la Sociedad y en su  
cumplir y velar porque se cumplan los reglamentos de los fondos que administre; k) Celebrar los contratos  
administración y manejo que constituyen el objeto social; l) Tomar todas las medidas y celebrar los contratos  
contratos relativos a los fondos que administre la Sociedad de conformidad con las disposiciones legales  
aplicables y los reglamentos que para ese efecto se expidan; m) Proteger y defender los patrimonios de los  
fondos que administra. n) Nombrar y remover a los empleados que requiera el buen funcionamiento

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento es de todos



La validez de este documento puede verificarse en la página [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) con el número de  
Superintendencia Financiera COLOMBIA  
Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**



SDC826623375

Sociedad, debiendo obtener la autorización de la Junta Directiva en aquellos casos en que ésta determine el requisito; ñ) Obtener autorización de la Junta Directiva para aquellos actos o contratos que lo requieran de acuerdo con estos estatutos o las propias determinaciones de la Junta Directiva; p) Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias de la sociedad, dentro o fuera del territorio nacional. PARAGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutados y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. PARAGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutados y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES: El Representante Legal de la Sociedad ante las autoridades de la Rama Jurisdiccional del Poder Público ante las autoridades públicas o privadas a las cuales les hayan sido asignadas, delegadas o transferidas, por disposición normativa funciones jurisdiccionales o funciones que en algún momento fueron competencia de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, b) Asesorar al Presidente para la designación de los representantes especiales que Representen a la Sociedad ante las autoridades mencionadas en el literal anterior. c) Todas aquellas que el Presidente le delegue. PARAGRAFO: En desarrollo de las facultades del literal a) anterior, el Representante Legal para asuntos Jurisdiccionales podrá suscribir los documentos que requiera para el debido cumplimiento de su cargo, tales como derechos de petición, tutelas, oficios, memoriales, poderes, sustituciones, entre otros. (Escritura Pública 3361 del 19 de diciembre de 2013 Notaría 43 de Bogotá). Mediante acta 217 del 24 de mayo de 2012 la Junta Directiva estableció la limitación a las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: El Presidente podrá celebrar todos los actos y/o contratos, de carácter nacional e internacional, comprendidos en el objeto social de la sociedad y necesarios para que ésta desarrolle plenamente sus fines, pero someterá de manera previa a la aprobación de la junta directiva todo acto y/o contrato que exceda del equivalente en Pesos Colombianos de Quinientos Mil (500.000) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un periodo de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviere determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional (oficio 2012067008). Mediante acta 224 del 19 de diciembre de 2012 la Junta Directiva aprobó una adición a las limitaciones ya registradas en las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Adicionalmente, se exceptiona de esta limitación a todos los actos y/o contratos que sean necesarios para cumplir o atender requerimientos legales o regulatorios y de regulación prudencial, tales como margen de solvencia, inversiones forzosas, capital y reservas de cualquier tipo. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un periodo de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviere determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a

Notaría 43 Encargada

SDC826623375



NL94KOMF7NEKNV8C

04/05/2020

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento  
es de todos

Integración



Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional. (oficio 2013004163).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Santiago García Martínez Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016	CC - 79945537	Presidente
Juan Daniel Frias Díaz Fecha de inicio del cargo: 07/07/2016	CC - 79942019	Primer Suplente del Presidente
Eduardo Duque Dubón Fecha de inicio del cargo: 07/09/2012	CC - 89000114	Segundo Suplente del Presidente
Fernando Augusto Medina Rojas Fecha de inicio del cargo: 20/10/2016	CC - 79382181	Tercer Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019130790-000 del día 18 de septiembre de 2019, que con documento del 14 de junio de 2019 renunció al cargo de Tercer Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 307 del 21 de agosto de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Maria Isabel Villa Ramírez Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 43505702	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Jorge Emilio Pacheco Monroy Fecha de inicio del cargo: 09/02/2016	CC - 80041243	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Daniela García Campos Fecha de inicio del cargo: 05/09/2019	CC - 1019096074	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Javier León Veloza Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 3190261	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Patricia Hurtado Cardona Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 31976756	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Ana Lucia Echeverri Botero Fecha de inicio del cargo: 11/01/2018	CC - 43273189	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Angélica María Izquierdo Beltrán Fecha de inicio del cargo: 04/10/2018	CC - 38558164	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Diego Alejandro Rodríguez Ramírez Fecha de inicio del cargo: 18/06/2019	CC - 1020786332	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
-Sandra Viviana Fonseca Correa Fecha de inicio del cargo: 22/05/2017	CC - 53177012	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
 Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)





Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN



SDC126623374

MÓNICA ANDRADE VALENCIA  
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto  
tiene plena validez para todos los efectos legales."

Notaria 18 Encargada

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Comutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento  
es de todos

Mi negocio

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.  
**ESPACIO EN BLANCO**  
PROTOCOLO

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.  
**ESPACIO EN BLANCO**  
PROTOCOLO



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.  
Sigla: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.  
Nit: 830515294 0 Administración : Direccion Seccional  
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01447565  
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 84A #10-33 Piso 5  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: pagos@godoycordoba.com  
Teléfono comercial 1: 3174628  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 84A #10-33 Piso 5  
Municipio: Bogotá D.C.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Correo electrónico de notificación: [notificaciones@godoycordoba.com](mailto:notificaciones@godoycordoba.com)  
Teléfono para notificación 1: 3174628  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".

Por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2022, con el No. 02862790 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S." a GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. y adicionó la(s) sigla(s) GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S..

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita. De manera particular, pero sin limitarse a ello, la Sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. Así mismo, la Sociedad puede dedicarse a la prestación de servicios integrales en prevención de riesgos laborales, promoción y prevención de la



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
salud, asesorías y capacitaciones en las siguientes áreas con profesionales competentes y licencia en salud y seguridad en el trabajo vigente: legal, medicina preventiva y del trabajo, medicina del deporte, nutrición deportiva y ocupacional, fisioterapia, psicología, auditoría, ingeniería, entre otras. Así mismo, podrá prestar servicios integrales para todas las actividades de asesoría en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión en Seguridad y salud en el trabajo. También podrá llevar a cabo las demás actividades y servicios que de acuerdo con la legislación vigente en riesgos laborales, se deban diseñar e implementar a nivel empresarial en organizaciones de cualquier sector empresarial ya sea del sector público o privado, entre otras. La Sociedad también podrá poseer y administrar establecimientos de comercio, así como celebrar cualquier tipo de operaciones sobre los mismos, y en general, estará facultada para realizar actividades de importación y exportación de bienes y servicios.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$10.000.000.000,00  
No. de acciones : 10.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$154.929.000,00  
No. de acciones : 154.929,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$154.929.000,00  
No. de acciones : 154.929,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la Junta Directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General De accionistas y de la Junta Directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; E) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la Asamblea General de Accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas- exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019, registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Guerrero Orbe Diego Alexander	C.C. 1.018.426.052	222.814
Barros Cardenas Jhon Alex	C.C. 1.043.015.010	287.301

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 5 de



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Rey Londoño Oscar Alberto	C.C. 1.140.866.487	300.858

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 22 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo	C.C. 1.151.946.356	253.718
Gabriela Restrepo Caicedo	C.C. 1.144.193.395	307.837
John Jairo Rodriguez Bernal	C.C. 1.070.967.487	325.589
Omar Alonso Camargo Mercado	C.C. 1.043.010.907	285.256
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	C.C. 1.013.641.075	278.768

Por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Chavez Alvarado Andres Felipe	C.C. 1.075.655.441	232007

Por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	C.C. 80.873.156	175488
Lara Marquez Amaranta Andrea	C.C. 1.032.683.377	283576
Benrey Zorro Juliana	C.C. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	C.C. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	C.C. 1.121.914.728	288455
Cano Gonzalez Claudia Andrea	C.C. 1.143.869.669	338180

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Por Documento Privado Sin núm del Representante Legal, del 29 de julio de 2020, registrado el 30 de julio de 2020 bajo el número 02602260 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Viviel Gonzalez Jorge Enrique	C.C. 1.014.225.303	277.946

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 13 de agosto de 2020, registrado el 13 de agosto de 2020 bajo el número 02606331 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P:
Romero Méndez Andrés Felipe	C.C.1.019.080.336	286.638
Duque Duque Juan Antonio	C.C.80.085.295	138.464

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 03 de septiembre de 2020, registrado el 4 de septiembre de 2020 bajo el número 02612596 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P.
Visbal Restrepo Juliana	C.C. 1.020.760.990	290190
Puentes Cespedes Ana Carolina	C.C. 1.010.229.148	330105

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 25 de septiembre de 2020, registrado el 25 de septiembre de 2020 bajo el número 02619669 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Palacio Varona Daniela	C.C. 1.019.132.452	353.307
Bejarano Rengifo Diana Marcela	C.C. 1.144.087.101	315.617

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 11 de febrero de 2021, registrado 4 de Marzo de 2021 bajo el número

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
02669512 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Carlos Augusto Suarez Pinzón	C.C. 1.032.470.700	347.852
Miguel Alejandro Lombana Cuevas	C.C. 1.022.398.901	308.077
Deivid Alexander Rodríguez Ramirez	C.C. 1.233.690.042	LT25399
Juanita Alexandra Silva Tellez	C.C. 1.023.967.067	334.300
Natalia Alzate Garcia	C.C. 1.095.786.682	173.261
Sara Heshusius Sancho	C.C. 1.144.068.042	346.483
Youssef Norredine Amara Pachon	C.C. 1.019.069.334	311.472

Por Documento Privado Sin Núm. del 12 de mayo de 2021 del Representante Legal, registrado 27 de Mayo de 2021, bajo el número 02709540 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Melani Vanessa Estrada Ruíz	C.C. 1.151.965.730	353898
Nicolás Eduardo Ramos Ramos	C.C. 1.018.469.231	365094
Daniel Andres Paz Erazo	C.C. 1.085.291.127	329936
Laura María Valderrama Medrano	C.C. 1.010.220.471	307507

Por Documento Privado sin num. del 18 de agosto de 2021, inscrito el 23 de Agosto de 2021 con el No. 02736169 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Miguel Angel Salazar Cortes	C.C. No. 1.019.128.867	347296
Shiara Faride Trujillo Canchon	C.C. No. 1.022.358.557	231596
Michelle Valeria Mina Marulanda	C.C. No. 1.234.195.459	359423

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2021, inscrito el 18 de Diciembre de 2021 con el No. 02773873 del libro IX, de conformidad



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

## Nombre Identificación Tarjeta Profesional

Angélica María Cure Muñoz	C.C. No. 1.140.887.921	369821
Paula Huertas Borda	C.C. No. 1.020.833.703	369744
Juan Camilo Lamprea Gil	C.C. No. 1.014.242.610	367728
María Alejandra Ramírez Olea	C.C. No. 1.152.225.557	359508

Por Documento Privado del 01 de julio de 2022, inscrito el 8 de Julio de 2022, con el No. 02856173 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andres Felipe Duque Velásquez	C.C No. 1.053.772.677	221517
Daniel Felipe Ramirez Sanchez	C.C No. 1.070.018.966	373906
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C No. 1.233.690.042	378503
Jorge Andres Ballesteros Hernandez	C.C No. 1.026.266.184	236678
Juan Pablo Briceño Santamaria	C.C No. 1.020.825.640	377383
Manuel Rodrigo Jaimes Beltran	C.C No. 1.071.169.446	30272
Nedy Johana Dallos Pico	C.C No. 1.019.135.990	373640

Por Documento Privado del 22 de julio de 2022 , inscrito el 27 de Julio de 2022 con el No. 02862244 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Diana Camila Gaitan Hemelberg	C.C No. 1.019.123.311	334532
David Ricardo Rodriguez Preciado	C.C.No. 1.057.581.246	251947

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2022 , inscrito el 26 de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Agosto de 2022 con el No. 02872678 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Octavio Andrés Castillo Ocampo	C.C No. 1.017.267.151	380131
Stephany Obando Perea	C.C No. 1.107.080.046	361681
Diana Esperanza Gomez	C.C No. 1.023.697.512 LT 30201	
Lina María Varela Vélez	C.C No. 1.234.091.873	364597

Por Documento Privado del 04 de octubre de 2022, inscrito el 7 de Octubre de 2022 con el 02887434 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andrea Juliana Hernández Rueda	C.C No. 1.098.751.528	295.390
Juliana Araque Quiroz	C.C No. 1.035.868274	293.693
Juliana Ramos Gaviria	C.C No. 1.020.814.258	375.572

Por Documento Privado del 28 de noviembre de 2022, inscrito el 30 de Noviembre de 2022 con el No. 02904376 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
María Carolina Martinez Portillo	C.C No. 1.020.721.389	207.162
Valentina Gomez Trujillo	C.C No. 1.012.459.669	366.614
Gina Paola Espinosa Martinez	C.C No. 22.464.396 116.498-D1	
Karen Sofia Sanchez Gonzalez	C.C No. 1.152.454.659	383.959
Paola Andrea Aponte Lopez	C.C No. 1.144.089.950	387.090
Mariana Pérez Cuenca	C.C No. 1.020.824.515	367.191
Maria Clara Jaramillo Berrio	C.C No. 1.152.702.664	388.141
Daniel Francisco Gomez Cortes	C.C No. 1.019.133.337	389.914

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 67 del 3 de agosto de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2022 con el No. 02870110 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Caroline Fraser Gonzalez	C.C. No. 1020796887

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA**

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 81717493
Segundo Renglon	Gustavo Jose Gnecco Mendoza	C.C. No. 19431641



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	
Cuarto Renglon	Daniel Francisco	C.C. No. 80873703
	Buritica Cordoba	
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

**SUPLENTES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy	C.C. No. 19251626
	Fajardo	

Por Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	

Por Acta No. 36 del 1 de junio de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2018 con el No. 02347445 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Segundo Renglon	Gustavo Jose Gnecco	C.C. No. 19431641
	Mendoza	

Por Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2020 con el No. 02582656 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Primer Renglon	Santiago Andres	C.C. No. 81717493
	Martinez Mendez	

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cuarto Renglon Daniel Francisco C.C. No. 80873703  
Buritica Cordoba

## SUPLEMENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Primer Renglon      Carlos      Hernan      Godoy      C.C. No. 19251626  
Fajardo

Por Acta No. 51 del 23 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre de 2021 con el No. 02740441 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Quinto Renclon      Juan Jose Uribe Lopez      C.C. No. 79445373

## REVISORES FISCALES

Por Acta No. 59 del 9 de noviembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901235 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Revisor Fiscal BAKER TILLY COLOMBIA N.I.T. No. 800249449 5  
Persona LTDA  
Juridica

Por Documento Privado del 11 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901236 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Revisor Fiscal Nydia Jasmin Mora C.C. No. 1022334637 T.P.  
Principal Torres No. 165330-T

Revisor Fiscal Erika Tatiana Castaño C.C. No. 1026276146 T.P.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Suplente

Cruz

No. 272902-T

**PODERES**

Por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:

Ana Cristina Medina González

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 52.991.736

NOMBRE:

Carlos Hernán Godoy Fajardo

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 19.251.626

NOMBRE:

Francisco Erney Buriticá Ruiz

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 10.529.620

NOMBRE:

Andrés Fernando Da Costa Herrera

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 80.505.099

NOMBRE:

Gustavo Gnecco Mendoza

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 19.431.641

NOMBRE:

Santiago Andrés Martínez Méndez

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 81.717.493

NOMBRE:

María Isabel Vinasco Lozano

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 53.006.455

NOMBRE:

Jhon Sebastián Molina Gómez

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.018.466.887

NOMBRE:

Sergio Andrés Campos Guzmán

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.015.433.588

NOMBRE:

José David Ochoa Sanabria

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.010.214.095



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jennifer Lorena Molina Mesa	C.C. 1.129.511.816
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Daniel Mauricio Contreras Jaimes	C.C. 1.090.424.399
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Fabio Andrés Salazar Reslen	C.C. 1.032.358.377
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ricardo José Aguirre Bejarano	C.C. 1.018.442.942
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ernesto Rosales Jaramillo	C.C. 1.090.420.262
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Juan Sebastián Velandia Párraga	C.C. 1.018.456.181

Por Documento Privado del 25 de agosto de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 14 de Septiembre de 2022, con el No. 00048142 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial a Diana Carolina Soler, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.727.319, para que represente al Poderdante y actúe en su nombre en los diferentes temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, afiliación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad. Específicamente, la Apoderada podrá desempeñar las siguientes funciones y todas aquellas directamente relacionadas con ellas o necesarias para poderlas ejercer, sin que se extiendan a temas o materias sustancialmente distintas: (i) Preparar, firmar y presentar cualquier documento en los temas relacionados con la administración, contratación y relevo de personal de la Sociedad, incluyendo contratos de trabajo, de prestación de servicios, diligenciamiento de formularios y documentos de vinculación ante cualquier tipo de autoridad pública o privada relacionada con el sector de salud, de trabajo o de seguridad social; (ii) Representar a la Sociedad administrativa, judicial y extrajudicialmente ante los empleados, funcionarios, terceros y toda clase de autoridades públicas, judiciales y administrativas en los temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad; (iii) Notificarse personalmente de cualquier decisión proferida por las autoridades

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
administrativas y judiciales en las cuales resulten involucrados de cualquier forma los intereses de la Sociedad en los temas referidos, presentar recursos, solicitar pruebas, responder y/o elevar peticiones frente a ellas.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002230 del 26 de junio de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	01147130 del 26 de julio de 2007 del Libro IX
Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios	01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX
Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX
Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02582655 del 2 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 51 del 31 de enero de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02790542 del 9 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02862790 del 28 de julio de 2022 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6910

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 46.394.370.833

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005. Fecha de envío de información a Planeación : 30 de noviembre de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.020.833.703

APELLIDOS HUERTAS BORDA

NOMBRES PAULA

FIRMA







FECHA DE NACIMIENTO

19-JUN-1998

**BOGOTA D.C**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**

**A+**

ESTATURA

G.S. RH

**F**

SEXO

**29-JUN-2016 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-00991547-F-1020833703-20180403

0060595515A 2

9903758087

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



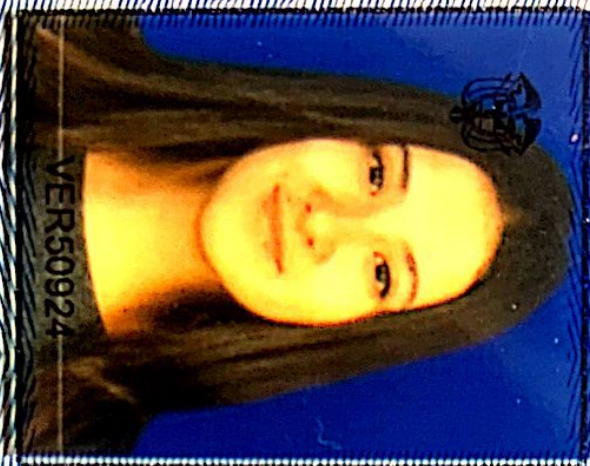


Consejo Superior  
de la Judicatura

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:

PAULA

APELLIDOS:

HUERTAS BORDA

PRESIDENTE CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO

UNIVERSIDAD

DE LOS ANDES

FECHA DE GRADO

31/08/2021

CONSEJO SECCIONAL

BOGOTÁ

CEDULA

1020833703

FECHA DE EXPEDICION

19/10/2021

TARJETA N°

369744



ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO  
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA  
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971  
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR  
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR  
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO  
NACIONAL DE ABOGADOS.